

Bosques, Clima y Amazonia

Selección de textos difundidos por el
Servicio de Información Indígena Servindi
en el 2016

Suscríbase gratuitamente a nuestro servicio intercultural de noticias y esté debidamente informado con notas críticas sobre temas ambientales, de pueblos indígenas y cambio climático:

www.servindi.org

servindi@servindi.org

Tabla de contenido

FONDO VERDE, FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO Y DERECHOS INDÍGENAS	3
CONOZCA EL MANDATO DE LA III CUMBRE AMAZÓNICA.....	6
PROPONEN APLICAR RIA COMO POLÍTICA PÚBLICA PARA TERRITORIOS INDÍGENAS	9
¿TIENEN LAS MUJERES IGUAL PARTICIPACIÓN EN LA TENENCIA DE LA TIERRA?	12
MUJERES, COMUNICACIÓN Y PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES .	14
PERÚ, PAÍS DE LOS BOSQUES, PRESENTÓ TERCER INFORME CLIMÁTICO.....	16
UN ENFOQUE TERRITORIAL ES MÁS IDÓNEO PARA COMPENSAR A LOS PUEBLOS.....	19
¿POR QUÉ LA DEFINICIÓN DE "BOSQUE" DE LA FAO LESIONA A COMUNIDADES Y BOSQUES?	22
LA NUEVA MEDIDA DE TODAS LAS COSAS: EL CARBONO.....	26
“MÁS QUE CARBONO, RIA ES VIDA Y CULTURA”.....	28
¿QUÉ ES LA DCI Y POR QUÉ ES IMPORTANTE?	30
APUESTAN POR INCLUIR ENFOQUE INDÍGENA EN LA GESTIÓN DE LOS BOSQUES.....	33
¿QUIÉN ASUME REALMENTE LOS COSTOS DE REDD+?	36
RACISMO EN LOS BOSQUES: UN PROCESO DE OPRESIÓN AL SERVICIO DEL CAPITAL	39
LAS RAÍCES COLONIALES RACISTAS DE LA CONSERVACIÓN OCCIDENTAL DE LOS BOSQUES.....	42

Fondo Verde, financiamiento climático y derechos indígenas

¿El Fondo Verde es un mecanismo adecuado para los derechos de los pueblos indígenas en la lucha contra el cambio climático?

Por Marisa Amori Fonseca*

2 de noviembre, 2016.- El cambio climático es un tema cada vez más importante para la sociedad. Las políticas que han existido hasta ahora se han enfocado en los aspectos físicos del cambio climático, como la contaminación, mientras que los aspectos sociales no han tenido tanta publicidad. Todavía, algunos grupos de personas, como los pueblos indígenas, están muy impactados por el cambio climático y tienen una percepción distinta de los cambios que la de los gobiernos. De hecho, las comunidades indígenas son observadoras de los ciclos, de la naturaleza y tienen un conocimiento bastante sofisticado sobre los fenómenos naturales. Ellas se han dado cuenta de muchos cambios sobre la temperatura o la estacionalidad, por ejemplo (1).

La Comunidad Internacional reaccionó con la Convención de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en 1992 y políticas más específicas como el protocolo de Kioto en 1997. La necesidad de ayudar y financiar a los países que tienen menos recursos se desarrolló y se concretó con la creación del Fondo Verde para el Clima. Este Fondo consiste en la creación de estructuras que permitan financiar proyectos que tienen por objetivo desarrollar prácticas sustentables y bajas en carbono a través de, por ejemplo, inversiones en energía solar. La conferencia de Cancún en 2010 adoptó una serie de mecanismos para seguir y verificar el financiamiento. (2)

Pero algunas comunidades fueron puestas de lado en temas como la consulta de proyectos supuestamente verdes (3), lo que resulta en un grave error para el combate contra el cambio climático, pues son estas comunidades las que se encuentran involucradas en esta lucha. Esto podemos verlo, por ejemplo, con la creación del Foro internacional de los pueblos indígenas, el cual reúne varias comunidades con el fin de tener más poder e influencia en la toma de decisiones.

Otro ejemplo de lo anterior, fue la conferencia sobre los pueblos indígenas y el cambio climático, organizada por el Grupo internacional de trabajo sobre asuntos indígenas (IWGIA) en febrero de 2008. El objetivo de esta última era hacer un debate sobre los desafíos y las amenazas que enfrentaban los pueblos indígenas. Allí se consideró que las barreras legales e institucionales, y la falta de reconocimiento de los derechos humanos de estos pueblos, impedían a las comunidades indígenas el poder utilizar estrategias existentes de forma eficaz.

La creación del Foro internacional de los pueblos indígenas sobre el cambio climático (4) permitió a los pueblos tener un reconocimiento que no tendrían si no se hubiesen juntado para tener una contribución en los asuntos relativos al impacto al medio ambiente.

Adicionalmente, varios problemas aparecen para las comunidades indígenas en temas relacionados con el financiamiento climático. (5) El hecho de no participar en la toma de decisiones les ha llevado a realizar sus propias reuniones y propuestas. En un taller regional organizado en Lima el 25 y 26 de abril de 2016 sobre los pueblos indígenas y las finanzas del clima, cuyo objetivo era la revisión de los procesos, implementación del Fondo Verde del clima y sus políticas relativas a los pueblos indígenas, se concluyó que: la estructura actual del Fondo Verde no permite garantizar la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas y,

además, los procesos del Fondo no permiten transmitir la información. Lo anterior resulta obviamente contrario al convenio 169 OIT el cual estipula que los gobiernos deberán:

“a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimiento apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;

b) Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan”.

Por eso las asociaciones que participaron en este taller emitieron varias recomendaciones para poder cumplir con las obligaciones del convenio OIT frente al Fondo Verde. Dentro de esas recomendaciones se encontraba: garantizar la protección de los Derechos Humanos a través del Convenio 169 de la OIT, garantizar el proceso de participación, la creación de un equipo técnico que permite la participación, garantizar espacios de observadores indígenas, garantizar la información y toma de decisiones, y también desarrollar criterios y políticas claramente definidas para el proceso de acreditación de la “entidad acreditada”.

Además, pidieron que las comunidades indígenas pudieran participar en los procesos de selección de las entidades acreditadas, así como no acreditar entes con actividades extractivas o contaminantes porque eso estaría contra los principios del Fondo y de los pueblos indígenas. Estas propuestas permitirían a las comunidades indígenas tener un verdadero poder en el financiamiento climático. No obstante, sus sugerencias no tuvieron mucho éxito pues empresas como HSBC y Credit Agricole (6), que invierten en energías fósiles y están involucradas en problemas de derechos humanos (7), fueron acreditadas en la 12ª reunión de la Junta Directiva.

Es necesario recordar que las entidades implementadoras del Fondo Verde tienen que cumplir con normas y salvaguardas sociales y ambientales adecuadas, para ello es necesario la información y la participación. No obstante, esos procedimientos parecen ser olvidados por el Fondo Verde, el cual impide tener una plena transparencia por su gran complejidad. Por eso, continúa existiendo la preocupación que ya existía en las comunidades indígenas antes de la creación del Fondo Verde sobre los mecanismos para combatir el cambio climático, aún después del Acuerdo de París.

De hecho, varias preguntas siguen latentes sobre el acceso al manejo de los recursos que llegan a las comunidades, ya que la mención de “comunidades indígenas” o “pueblos indígenas” no se encuentra en el articulado, pero sí en los anexos del Acuerdo de París, sin embargo, estos no son muy precisos. Además, por el momento, no hay mención de los pueblos indígenas en el proceso de acreditación. Únicamente se autorizó, en octubre 2015, a la Federación por la autodeterminación de los pueblos indígenas (FAPI) el ser acreditada como observadora.

Pero además de las dificultades que existen en la estructura del Fondo Verde para las comunidades indígenas, también hay problemas sobre algunos proyectos financiados por el Fondo Verde para promover una actividad más sostenible.

En Panamá, por ejemplo, un proyecto de energía hidroeléctrica tuvo incidencias sobre las comunidades indígenas. Aunque el proyecto fuera efectivamente para cambiar la energía fósil y utilizar energía más limpia, que era uno de sus objetivos, varios errores fueron cometidos por el Fondo Verde. Primero, no hizo un estudio suficiente sobre los impactos de este proyecto sobre las comunidades ngabe, que estaban siendo afectadas, y segundo, estos indígenas no fueron consultados a pesar de los impactos sociales, ambientales y económicos posibles que iban a ocurrir y a pesar de las oposiciones.

En Guatemala (8) realizaron el proyecto de la empresa hidroeléctrica Santa Rita, ubicado en el departamento de Alta Verapaz, el cual ganó créditos compensatorios de carbono que podrían comercializarse en el Mercado Europeo y permitiría reducir las emisiones de carbono para llegar a las metas. Pero, igual que en Panamá, este proyecto fue muy controversial, pues no hicieron una consulta previa y libre.

Estos no son casos aislados y podemos preguntarnos si el Fondo verde es realmente una estructura adecuada para los pueblos indígenas, por lo menos si no se cambia el proceso que existe ahora. La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA (9)) considera, por ejemplo, que el financiamiento debería efectuarse de forma directa porque el objetivo no sería captar nuevos fondos, sino asegurarse que los pueblos indígenas tengan un acceso y la posibilidad de manejarlos.

En una reunión de la Organización de las Naciones Unidas de la Alimentación y Agricultura (FAO) en 2016 (10), el director notó que pocos países se han comprometido a garantizar los derechos de los pueblos indígenas de forma muy clara como se puede ver en el Acuerdo de París.

Por lo tanto, una participación indígena más amplia, la garantía del derecho a la tierra y una gestión de los territorios más grandes sería una respuesta más conforme con los objetivos del Fondo Verde, y de forma más general, más alineada en la lucha/adaptación al cambio climático porque el tema ambiental no puede funcionar si las problemáticas sociales no son solucionadas.

Notas:

(1) <http://www.territorioindigenaygobernanza.com/cambioclimatico.html>

(2) http://unfccc.int/porta1_espanol/informacion_basica/la_convencion/conferencias/cancun/items/6212.php

(3) <http://www.elmundo.cr/gobierno-panameno-decide-mantener-polemico-proyecto-hidroelectrico/>

(4) <http://www.cinu.org.mx/prensa/especiales/indigenas/>

(5) <https://es.scribd.com/document/310374900/Fundamentos-de-las-Finanzas-para-el-Clima-para-los-Pueblos-Indigena>

(6) http://www.financeresponsable.org/fiche-entreprise.php?id_entreprise=15

(7) <http://www.slate.fr/story/100573/fairfinance-oxfam-evaluation-politique-investissement-banques>

(8) <https://cmiguato.org/represa-hidroelectrica-verde-provoca-acusaciones-de-flagrantes-violaciones-a-los-derechos-humanos/>

(9) <http://www.coica.org.ec/>

(10) <http://www.fao.org/home/es/>

*Marisa Amori Fonseca es integrante de la Asociación Ambiente y Sociedad.

Fuente: Contagio Radio: <http://www.contagioradio.com/fondo-verde-financiamiento-climatico-y-derechos-indigenas-articulo-30900/>

Conozca el Mandato de la III Cumbre Amazónica



Foto: AIDSESEP

Servindi, 28 de octubre, 2016.- La III Cumbre Amazónica concluyó hoy viernes 28 de octubre con la aprobación de un Mandato para la acción bajo el lema: "Los Territorios y Pueblos Indígenas enfrían el planeta y garantizan se cumplan los acuerdos climáticos".

El documento se adoptó en un cónclave internacional en la que se dieron cita las organizaciones indígenas amazónicas nacionales de nueve países que comparten la cuenca amazónica y que se encuentran articuladas en la [Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica](#) (COICA).

El mandato amazónico se produce frente a la catástrofe climática en que se sume el mundo, y el grave riesgo de que los compromisos internacionales para enfrentarla queden en retórica frente a la presión de los intereses desarrollistas.

Denuncian las políticas que bajo el pretexto de la "integración y el desarrollo" emprenden megaproyectos de infraestructura e industrias extractivas que ocasionan el acaparamiento de tierras, el despojo territorial, la migración, la colonización y la contaminación.

El mandato amazónico propone mantener el 80 por ciento de los combustibles fósiles en el subsuelo para reducir las emisiones de gases contaminantes, y cesar las grandes plantaciones de palma aceitera.

Asimismo, plantean detener la imposición de áreas naturales protegidas sobre territorios indígenas, asegurar la participación indígena en el diálogo con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) y la banca multilateral.



ORGANIZACIONES MIEMBROS



Destacan que la ciencia ha ratificado la enorme contribución de los territorios indígenas para frenar la catástrofe climática y contribuir al cumplimiento del Acuerdo de París.

Enfatizan que asegurar los territorios indígenas "es una solución de bajo costo" que ayuda a los gobiernos a cumplir sus metas de reducción de emisiones comprometidas (NDC por su sigla en inglés: Nationally Determined Contributions).

Plantean la intangibilidad total de los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial, quienes representan "la más genuina expresión de la autonomía y la libre determinación" de nuestros pueblos garantizados por instrumentos internacionales de derechos humanos.

Estrategia Indígena Amazónica frente a la Crisis Climática

Afirman que la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) aporta al cumplimiento de los compromisos de reducción de emisiones de los países amazónicos a través de la Estrategia Indígena Amazónica frente a la Crisis Climática

Dicha estrategia tiene como pilares la titulación y seguridad territorial, el manejo holístico integral y la aplicación de Redd+ Indígena Amazónico (RIA) como "adecuación de REDD+ a nuestros Planes de Vida Plena", entre otros aspectos.

Convocan el respaldo internacional para los doce territorios indígenas de RIA en el Perú por 3 millones de hectáreas y el acceso directo a los financiamientos climáticos "siguiendo el ejemplo

del Mecanismo Dedicado Específico (MDE) del Programa de Inversión Forestal (FIP) del Banco Mundial.

Invocan a las organizaciones indígenas amazónicas e internacionales y a las entidades aliadas exigir la aplicación de los acuerdos y decisiones de París "que coincidan con la agenda indígena amazónica".

Hacia una economía indígena de vida plena

Una sección del mandato concierne a la promoción de la economía de vida plena como alternativa de transición post extractivista hacia una economía con el bosque en pie, que respete la sabiduría y el conocimiento tradicional y estimule "los mercados de valores y solidaridad".

Respecto a la adaptación climática proponen desarrollarla desde los pueblos indígenas, por cuenca amazónica y con el aporte y rol esencial de la sabiduría de las mujeres indígenas, integradas por organizaciones territoriales.

Llaman a implementar la Decisión 135 del Acuerdo de París referido a la construcción de la plataforma global sobre conocimientos tradicionales y cambio climático, "de abajo hacia arriba" con la participación de los sabios y sabias tradicionales.

Uno de las demandas finales es la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en todos los procesos de las Naciones Unidas, en especial la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Acceda al documento completo a partir del siguiente enlace:

- https://ia801509.us.archive.org/24/items/MandatoIiiCumbreAmazonica/Coica_iiiMandatoAmaznico28.10.16.pdf



- Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP (Perú).
- Asociación de Pueblos Amerindios de Guyana, APA (Guyana).
- Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia, CIDOB (Bolivia).
- Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña, COIAB (Brasil).
- Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, CONFENIAE (Ecuador).
- Federación de Organizaciones Amerindias de Guyana Francesa, FOAG (Guyana francesa).
- Organización Regional de los Pueblos Indígenas de Amazonas, ORPIA (Venezuela).
- Organización de los Pueblos Indígenas de Surinam, OIS (Surinam).
- Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAC (Colombia).

Proponen aplicar RIA como política pública para territorios indígenas

Servindi, 25 de setiembre, 2016.- La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDSESP) demanda que 12 territorios indígenas, que representan más de 2 millones de hectáreas, sean considerados en el marco de REDD+ Indígena Amazónico (RIA), que más que una propuesta debe convertirse en un Programa Nacional y una política pública.

El REDD+ Indígena Amazónico es una estrategia climática de los pueblos indígenas, que si bien comparte la meta de reducir emisiones, va más allá porque se propone fortalecer los “planes de vida plena” de las comunidades, además de frenar el extractivismo en los territorios indígenas.

Asimismo, mediante RIA se asegura la pervivencia cultural, se ayuda a mantener el promedio de la temperatura global debajo de los 2 grados e impulsa los sistemas productivos de bosques en pie.

En tal sentido RIA rechaza cualquier intención de lucro con los bonos de carbono que corresponden al enfoque tradicional de REDD+ que pone al carbono como medida esencial y clave y no considera a los bosques en su integridad y funciones.

Los doce territorios indígenas

AIDSESP elaboró una tabla resumen en la que detalla las regiones, organizaciones, territorios y hectáreas que comprenden las doce regiones propuestas. En esta se puede apreciar que la propuesta involucra a 9 regiones amazónicas, dieciocho organizaciones indígenas, ocho Ejecutores de Contrato de Administración (ECA) y alrededor de 250 comunidades nativas.

REGION	ORGANIZACIONES	TERRITORIOS	Hectáreas
MADRE DE DIOS	Federación Nativa de Madre de Dios (FENAMAD), COHARYIMA y Ejecutor del contrato de Administración de la Reserva Comunal Amarakaeri (ECA-RCA) Pueblos Harakmbut, Yine y Matsigenka	Reserva Comunal Amarakaeri 10 Comunidades Nativas	402, 335 has
UCAYALI, JUNIN, PASCO, HUANUCO	ARPI, ORAU, CORPIAA y federaciones y Ejecutor del contrato de Administración de la Reserva Comunal Sira (ECOSIRA) Pueblos Asháninka, Shipibo-Conibo, Ashéninka, Yanesha y Comaca-Cocamilla.	Reserva Comunal El Sira 69 comunidades	616,413 has
JUNIN	ARPI, COMARU, CARE y Ejecutor del contrato de Administración de la Reserva Comunal Asháninka (ECO-Asháninka) Pueblos Asháninka, Kakinte y Matsigenka	Reserva Comunal Asháninka 22 comunidades	184,468 has
UCAYALI	ORAU, ORDIM y 10 comunidades Lago Imiría Pueblo Shipibo	Área de Conservación Regional Lago Imiría 10 comunidades	150,000 has
LORETO	ORPIO, OISPE, ORKIWAN, FIKAPIR y Comité Coordinador ECA SIECO PAI Pueblos Secoya y Kichwa	Reserva Comunal AIRO PAI 11 comunidades	247,887 ha
	ORPIO, FIKAPIR, OISPE y Comité Coordinador ECA HUIMEKI Pueblos Huitoto, Kichwa y Secoya	Reserva Comunal HUIMEKI 09 comunidades	141,234 ha
	CORPI Uno de los Territorios Integrales de la provincia de Datem del Marañón	Territorio Integral de un Pueblo Indígena	
CUSCO	COMARU y ECA MAENI Pueblo Machiguenga	Reserva Comunal Machiguenga	218,905 has
AMAZONAS	ORPIAN-P y ECA TUNTANAIN Pueblo Awajun	Reserva Comunal Tuntanain	94 967 has
	ORPIAN-P y ECA CHAYU NAIN Pueblo Awajun	Reserva Comunal Chayunain	23 597 has
SAN MARTIN	CODEPISAM y Comunidad Yurilamas Pueblo Kichwa	Comunidad Nativa Yurilamas	33,866 has
	CODEPISAM y FERIAM Pueblo Awajun	Corredor de Conservación en CCNN Etnia Awajun	80,500 has
	CODEPISAM y FEPIKRESAM Pueblo Kichwa	Concesión para conservación bosque de Angaiza	8,031 has
TOTAL 9 REGIONES AMAZONICAS	18 Organizaciones Indígenas 08 ECAs Más de 250 Comunidades		2'202,203 has

Reacciones a la propuesta de RIA

Para Mariela Guisa, del Programa Nacional de Conservación de Bosques (PNCB), se registra un avance en la inserción explícita de RIA en la Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático.

Además, puntualiza que REDD+ es uno de los mecanismos, entre otros, pero no es el único, que se quieren implementar en el marco de la estrategia y que debe adaptarse a diversas realidades.

Patricia Luna, Coordinadora de la Declaración Conjunta de Intención (DCI) suscrita entre Noruega, Alemania y Perú, precisó que RIA está dentro de los principios de la DCI para frenar la deforestación en el Perú y promover la gestión sostenible de los bosques.

El taller

La demanda para crear un Programa Nacional y fortalecer RIA como política pública fue el tema principal del taller "RIA y Política Pública" organizado el 31 de agosto por la AIDESEP y que congregó a representantes indígenas, organismos públicos y de la cooperación internacional.

Las principales posibilidades de RIA abiertas en el diálogo con las diversas entidades participantes fueron las siguientes:

INSTITUCION	Posibilidad con RIA
WWF	<ul style="list-style-type: none"> • Contribución de los PPII a los NDC en Mitigación y Adaptación. • Salvaguardas desde el enfoque indígena y su inclusión en el Sistema Nacional de Salvaguardas • Estudios técnicos regionales • Diseño proyecto RIA al Fondo Verde del Clima. • Apoyo al Programa Nacional RIA de AIDESEP. Relación institucional AIDESEP – WWF. • Preparar junto con COICA y AIDESEP contenidos a presentar en la COP 22.
CONSERVACION INTERNACIONAL	<ul style="list-style-type: none"> • Experiencia en la Zona del Altomayo, Recuperación de bosques y medios de vida, restauración de riberas, promoción de cultivos sostenibles. • Involucramiento de las mujeres indígenas en el RIA. Apoyo en el desarrollo de materiales para la COP 22. • Apoyo a las iniciativas RIA de la región San Martín. • Apoyo en el diseño del proyecto RIA al Fondo Verde del Clima.
DRIS	<ul style="list-style-type: none"> • Proyecto con COICA para buscar financiamiento en las reservas comunales Amaraakaeri y Yanesha. • Articular con instancias, como la firma con PNCB, y ECA, FENAMAD y la coordinación en el marco de las TDC.

RAINFOREST ALLIANCE	<ul style="list-style-type: none"> • Diversificación productiva sostenible a partir de los bosques en pie • Diversificación de la producción en el manejo de un área comunal • Apoyo en la conexión entre RIA y economía indígena.
PNCB	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo del Plan de Trabajo del Convenio Específico PNCB – AIDESEP. • RIA como Línea de Implementación en la Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático.
Proyecto Amazonia Resiliente	<ul style="list-style-type: none"> • Temas convergentes: Reducción de las amenazas, valor de los servicios ecosistémicos, fortalecimiento de capacidades, actividades productivas sostenibles, capacitación y transferencias de tecnologías • Apoyo al RIA en la Reserva Comunal El Sira (ámbito del proyecto).
DCI	<ul style="list-style-type: none"> • RIA está dentro de los principios de la DCI. • Los 12 RIA ya están consideradas en el plan de implementación de la Fase 2 de la DCI • Avanzar la fase más programática de la DCI Fase 2 y de las necesidades específicas en cada territorio RIA, para orientar el apoyo de la DCI. • Rol articulador y precisar lo que implica el RIA en cada territorio para lograr el apoyo.
ONU REDD	<ul style="list-style-type: none"> • Implementación del MRV-I en las nueve bases regionales de AIDESEP y Articulado al MRV Nacional y al SNMB • El enfoque de la estrategia coincide con el enfoque de economía indígena. • El diseño de este mecanismo financiero es hacerlo funcional con el enfoque de economía indígena de RIA
SERNANP	<ul style="list-style-type: none"> • El RIA es una oportunidad para darle fuerza a la conservación, el aprovechamiento de recursos y generar financiamiento. • El RIA está dentro del contrato de administración para la RCA. • La experiencia RIA se puede replicar en otras RC y debe de fortalecer los objetivos de conservación y uso de las áreas.
MINAGRI – PTRT3	<ul style="list-style-type: none"> • Articulados al RIA en componente de consolidación de seguridad jurídica, contribución a la consolidación de derechos, y mejorar medios de vida. • Convergencia en complementar la red geodésica nacional, incorporando el monitoreo en la selva. • Coordinación con los cooperantes en titulación, con el fin de mejorar las intervenciones y no duplicar esfuerzos.

PNUD	<ul style="list-style-type: none"> • Se apoyó con Proyecto de fortalecimiento en REDD+, y ONU REDD. • Convergencia con Proyectos Resiliencia y Eba Amazonia de PNUD • Compromiso de seguir buscando financiamiento para proyectos con RIA y Veeduría Forestal, que son dos temas prioritarios dentro del PNUD.
BID	<ul style="list-style-type: none"> • Paralelo de las TDC con RIA, incluyen compensaciones por áreas conservadas. Ver convergencias en este tema • La empresa consultora que está diseñando el FIP debe entregar el plan de trabajo para ser aprobado por el Comité Nacional y ahí se puede ver relación con RIA
OSINFOR	<ul style="list-style-type: none"> • Normativa para reducción de multas por conservación de bosques. • - Fortalecimiento de los mecanismos de monitoreo en zonas asignadas en los planes de conservación.

Henderson Rengifo, presidente de la AIDSEP, dijo que es necesario fortalecer la institucionalidad y la propuesta de RIA como Programa Nacional y mecanismo de defensa territorial indígena que a la vez valore la contribución de los pueblos originarios para enfrentar la crisis climática.

Edwin Vásquez, Coordinador General de la COICA, señaló que “RIA es uno de los mecanismos que tenemos para asegurar que los fondos del clima lleguen a beneficiar directamente a las comunidades”.

Señaló que RIA “no está escrito en piedra y está sujeto a los aportes de las comunidades”; y agregó que es un reto para los pueblos indígenas de la Amazonía el diseñar cómo implementar los “planes de vida plena”

Acceda al documento propuesta sobre RIA en el siguiente enlace:

- <http://www.aidesep.org.pe/wp-content/uploads/2016/09/RIA-Programa-Nacional-31.8.16-V5-1.pdf> (PDF, 10 páginas)

¿Tienen las mujeres igual participación en la tenencia de la tierra?

Por Cristina Sánchez

Servindi, 23 de septiembre del 2016-. Nos encontramos en una realidad nacional donde el machismo reina en diversas actividades. Las comunidades nativas y campesinas no son inmunes a este problema, en donde existen restricciones para la participación de las mujeres en espacios públicos. Uno de estos ámbitos es el acceso a la tierra.

Ante esta situación, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) y la Asociación Servicios Educativos Rurales (SER) organizaron el 21 de setiembre el foro "Comuneras Calificadas: acceso de las mujeres indígenas a la gobernanza de la tierra".

El evento contó con la participación de Ketty Marcelo, presidenta de ONAMIAP; Carmen Romero, representante de la Dirección de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural (DISPACR) del Ministerio de Agricultura y Solange Abad, representante de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).

Asimismo, Patricia Angulo, asesora de la congresista Tania Pariona; Pedro Castillo, del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES); y Alicia Abanto, de la Defensoría del Pueblo. Al evento también concurrieron mujeres de diversas partes del Perú.

En el evento se puso de relieve la importancia que representa la tierra para las mujeres indígenas. "¿Qué es para nosotras la tierra? Es un espacio donde construimos nuestra identidad, donde vivimos y se refleja toda nuestra existencia. Los pueblos y las mujeres indígenas sin nuestro territorio, nada somos", afirma Ketty Marcelo.

Enfoque social y legal del problema

El evento abordó el tema del acceso de las mujeres indígenas y campesinas a la gobernanza de la tierra desde dos enfoques: el social y el legal.

El primero se refirió a las costumbres, actitudes y tradiciones que existen dentro de las comunidades, en donde históricamente se ha presentado una superioridad de los varones sobre las mujeres en lo que respecta a acceso a derechos y oportunidades.

El segundo enfoque, el legal, abordó el tema desde el marco legal existente, el cual según se mencionó en el foro, no hace ninguna distinción entre los hombres y las mujeres a la hora de acceder, trabajar y titular las tierras.

Abordar ambos enfoques, ocasionó un choque de posturas entre los distintos participantes.

Tal como lo expresó Solange Abad, según las leyes se puede denominar comunero calificado a toda persona que tenga la mayoría de edad, residencia o estancia mínima de cinco años en la comunidad y que esté registrado en el padrón, como requisitos básicos.

Pero en la práctica, muchas de las participantes afirmaron que no son incluidas ni respetadas como comuneras calificadas debido al sistema jerárquico patriarcal que predomina en sus comunidades.

Incluso, criticaron que las leyes de comunidades nativas y campesinas no incluyan específicamente el tema de género y que se generalice a los comuneros utilizando un término masculino.

Visibilizar el problema como primer paso

Ser mujer indígena en el Perú, no solo presupone una postura de desigualdad por pertenecer a un grupo indígena, sino también, debido a que dentro de sus comunidades no son tomadas en cuenta ni respetadas.

Por ese motivo, muchas de las participantes alzaron su voz incitando a las demás mujeres a concientizar acerca de la capacidad que ellas tienen para administrar la tierra y que este es un derecho del cual se les ha privado.

El evento manifestó esta discrepancia entre las participantes provenientes de instituciones públicas y las representantes de organizaciones indígenas.

Finalmente se rescató que espacios y diálogos como estos eran de suma importancia para la construcción de la igualdad entre hombres y mujeres indígenas o campesinas.

Alicia Abanto, acotó que era muy importante que el problema se haga visible con los actores y las instancias adecuadas.

Si bien el tema de género es transversal y existen muchos actores involucrados, Patricia Angulo -asesora de la congresista Tania Pariona- y la representante de SUNARP se comprometieron a trabajar este tema a través de las comisiones que se están creando e invitó a las mujeres a presentar iniciativas que aporten a su participación.

Como respuesta por parte de la Defensoría del Pueblo, se solicitó que el cambio no sea solo legal, sino también que se incluya una mejor atención pública a las mujeres.

Antes de finalizar el evento, Alicia Abanto acotó la importancia de trabajar el tema de las mujeres de forma integral, teniendo en cuenta que actualmente existen varios proyectos que priorizan titular tierras indígenas y que son espacios en donde se debe asegurar que se incluya el enfoque de género y la participación de las mujeres.

Mujeres, comunicación y pagos por servicios ambientales

Por Cristina Sánchez

Servindi, 8 de agosto 2016.- Diversos mecanismos de pagos por servicios ambientales (PSA), como REDD+ o la propuesta amazónica RIA, se están convirtiendo una realidad en el Perú. Tanto acuerdos internacionales como políticas nacionales los están poniendo sobre la mesa como posibles soluciones para combatir el cambio climático.

Un reciente estudio realizado por el Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) evidencia que, si bien estos mecanismos se están convirtiendo en una realidad, aún hay varios temas que son necesarios investigar y profundizar.

El estudio, llamado "Aprovechamiento comunitario del bosque en Perú con un esquema de pagos por servicios ecosistémicos", tuvo como objetivo analizar el funcionamiento de los PSA, con especial énfasis en el cómo se toman las decisiones en las comunidades respecto al bosque.

Se esperaba que los resultados de este estudio aporten información sobre cómo ciertas políticas nacionales pueden incidir en los territorios comunales y afectar el estilo de vida de las personas que los ocupan. Los PSA son mecanismos que están dirigidos a proporcionar pagos a los usuarios de los bosques por conservarlos y que eviten realizar otro tipo de actividades que pudiesen aumentar los niveles de emisiones de carbono, y por ende, deforestación o degradación de los bosques.

Pero dentro de este estudio dos elementos saltaron a la vista. El primero es la importancia de la comunicación tanto entre las distintas comunidades como dentro de ellas mismas. Este elemento ha demostrado ser el eje principal sobre el cual se establecen las negociaciones y organizaciones entre las distintas comunidades, e inclusive, organizaciones externas. Es importante tomarlo en cuenta con miras a que estos mecanismos funcionen bajo un sistema de gobernanza territorial nacional eficiente.

Por otro lado, el segundo elemento identificado es la falta de investigación que hay alrededor del tema de la participación de las mujeres en la toma de decisiones dentro de las comunidades.

Si bien se tiene registro de que esta es baja, a comparación de los hombres, el estudio evidencia que la falta de información sobre el rol de las mujeres como lideresas y tomadoras de decisiones obstruye el poder seguir avanzando en proyectos relacionados al medio ambiente.



La participación de las mujeres en los mecanismos que luchan contra el cambio climático no se contemplan en proyectos nacionales, sino también se han puesto sobre la mesa por parte de organizaciones grandes como la ONU.

El estudio

El estudio hecho por CIFOR fue realizado en las regiones de San Martín, Ucayali y Puerto Maldonado. Tanto en comunidades nativas que ya participan en mecanismos de PSA, como comunidades en las que aún no se tratan estos temas. El estudio también se efectuó, de forma comparativa, en Tanzania e Indonesia.

La metodología utilizada para realizarlo fue el análisis de cuatro formas diferentes de ofrecer los PSA, simulando la toma de decisiones de los participantes.

Asimismo, se utilizaron cuatro variaciones de la situación base, que respondían a elementos como el ente encargado de realizar el pago, las personas encargadas de recibirlo, los niveles de comunicación y organización que había entre las comunidades, y el nivel de participación de la mujer.

Cabe resaltar también, que una de las principales preocupaciones que tienen las comunidades nativas sobre la aplicación de estos mecanismos es la posible limitación que ellos tendrían sobre el uso de sus bosques. Este ha sido siempre su medio de vida y han aprendido a organizarse según como se relacionan con él.

Para revisar el estudio completo, hacer clic en el siguiente enlace:

- http://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BMwangi1602.pdf

Perú, país de los bosques, presentó tercer informe climático

Por Cristina Sánchez

Servindi, 1 de julio, 2016.- En junio el Ministerio del Ambiente presentó la **Tercera Comunicación Nacional**, documento que presenta una extensa información sobre los avances realizados en el país, durante el periodo 2010-2015, para lograr un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. Se trata de uno de los compromisos del Estado peruano según lo establece la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) de 1992.

La Tercera Comunicación Nacional reafirma el cumplimiento de los compromisos y obligaciones del Perú como parte de la CMNUCC, y refleja el trabajo del Ministerio del Ambiente, conjuntamente con diversos actores nacionales en lo que respecta a la generación de políticas, planes e instrumentos para la gestión del cambio climático.

Perú, país de bosques

El Perú cuenta con una extensión territorial de más de un millón de km² que son atravesados por la cordillera de los Andes dividiéndola en tres grandes regiones: costa, sierra y selva. Cada región posee sus propias características y ecosistemas, pero entre las principales podemos encontrar a los bosques tropicales, los bosques secos, los humedales y uno de los ecosistemas marinos más ricos del mundo.

Tabla de cobertura forestal del Perú

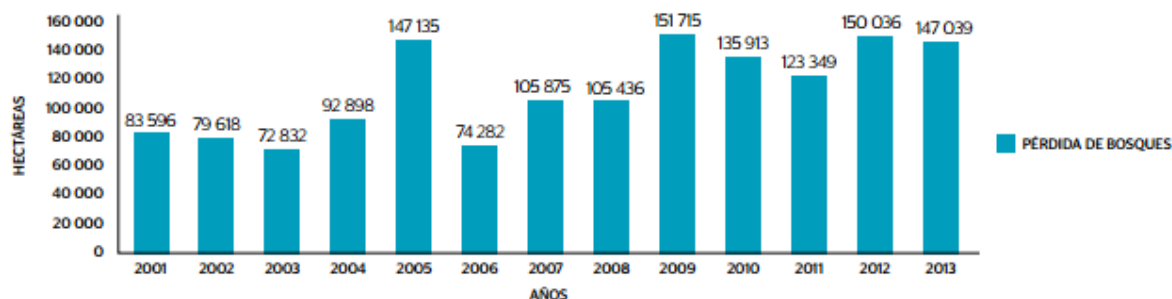
	Ha DE BOSQUES AMAZÓNICOS	% DE BOSQUES AMAZÓNICOS
Bosques en ANP y otras áreas de conservación		
Área Natural Protegida	16 180 005	23,34
Área de Conservación Regional	2 042 858	2,95
Área de Conservación Privada	19 769	0,03
Bosques en reservas territoriales, comunidades nativas y campesinas		
Reservas territoriales a favor de indígenas aislados o en contacto inicial	1 687 940	2,44
Comunidad nativa titulada	11 547 403	16,66
Comunidad campesina titulada	734 497	1,06
Concesiones maderables y no maderables		
Concesiones para conservación	799 232	1,15
Concesiones para ecoturismo	53 314,47	0,08
Concesiones de castaña y shiringa	851 148	1,23
Concesiones para reforestación	124 011	0,18
Concesiones de Área de manejo de Fauna Silvestre	1 810	0,00
Concesiones maderables	7 180 421	10,36

Fuente: Departamentos del Perú. (2014). Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático. MINAM (Editor). Recuperado el 18 de junio de 2015, de sitio web de GEOBOSQUES: <http://geoservidorminam.gob.pe/geobosque/departamento>

Fuente: Tercera Comunicación Nacional

Podría decirse que Perú es un país de bosques debido a que sus 74,2 millones de hectáreas lo convierten en el noveno país con mayor superficie boscosa en el mundo (MINAM, 2014a). Para esto, se ha desarrollado un marco normativo (Ley 29763 y sus reglamentos), que promueva el aprovechamiento sostenible de otros productos no maderables, así como de los diversos bienes y servicios del bosque, orientado la gestión a aumentar el valor del bosque en pie.

Pérdida forestal al año



Fuente: Departamentos del Perú. (2014). Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático. MINAM (Editor). Recuperado el 18 de junio de 2015, de sitio web de GEOBOSQUES: <http://geoservidorminam.gob.pe/geobosque/departamento>

Fuente: Tercera Comunicación Nacional

Debido a esto, el Perú ha venido participando en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático desde el año 1992. Esta participación confirma oficialmente el compromiso del país en contribuir al objetivo de “estabilizar la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera y evitar llegar a un nivel de interferencia antropogénica peligrosa”. Años después, en el 2002, se ratificó este compromiso al incorporarse al Protocolo de Kioto. Fue en el marco de dichos compromisos que el pasado 02 de junio el Ministerio del Ambiente presentó la Tercera Comunicación Nacional.

De los 31.1 millones de habitantes que tiene el Perú, se tiene estimado que 23.3% se encuentran en un entorno rural (según el INEI), los cuales, al vivir en pobreza y pobreza extrema, son más vulnerables frente a los efectos del cambio climático.

Esta información es clave para entender que el Perú tiene como principal preocupación enfrentar de manera orgánica y eficiente los posibles impactos del cambio climático. Evitando así que se ocasionen pérdidas y daños que afecten a la población en general y sus medios de vida.

Tercera Comunicación Nacional

La Tercera Comunicación Nacional es un documento que hace llegar a la comunidad nacional e internacional el cumplimiento de los compromisos y obligaciones del Perú como parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

La anterior comunicación fue realizada en el año 2010 y desde esa fecha se han presentado grandes avances en lo que respecta a la gestión del cambio climático en el Perú. Tanto el Estado como la población, han tomado mayor consciencia sobre los potenciales impactos del cambio climático.

La elaboración de la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático ha sido realizada bajo la coordinación del Ministerio del Ambiente, desde el Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales como punto focal ante la CMNUCC.

Asimismo, cabe resaltar que este trabajo cobró mayor impulso durante el año 2014 gracias al apoyo financiero de diversas instituciones que colaboraron con la elaboración y actualización de inventarios nacionales de Gases de Efecto Invernadero (GEI), entre otros.

Por su parte, los aportes realizados por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial han permitido obtener una información confiable, que se basa en fuentes verificables y que ha sido presentada de una manera amigable para los tomadores de decisiones, tanto políticas como técnicas.

Por este motivo, esta comunicación ha sido también es una forma de expresar, desde el Ministerio del Ambiente, un reconocimiento a todas las personas e instituciones que han contribuido a la elaboración de este documento y hacer así, un llamado a continuar e intensificar la colaboración y el esfuerzo conjunto para afrontar los retos que impone el cambio climático.

Entre los principales logros obtenidos y presentados en la Tercera Comunicación se encuentran el cumplimiento de los compromisos internacionales y la actualización y aprobación de la nueva Estrategia Nacional ante el Cambio Climático (ENCC).

Agenda pendiente

Claramente el tema medio ambiental y el cambio climático se han ganado un espacio en la agenda nacional. Documentos como estos lo demuestran, y esta tendencia irá en aumento, mientras haya más información y conocimiento sobre los efectos negativos del cambio climático sobre el Perú y el mundo.

En diciembre de 2014 se realizó la COP20 en Lima introduciendo y posicionando la necesidad de gestionar el cambio climático en la agenda nacional. Uno de los principales avances es la aprobación de la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático (ENCC) y la presentación en las Contribuciones Nacionales ante la CMNUCC.

Actualmente, el principal reto del país relacionado al cambio climático es su integración en la agenda nacional con miras a lograr un desarrollo sostenible y bajo en carbono que no solo busque frenar el cambio climático, sino invertir el daño hecho.

Los objetivos en materia de política climática han sido definidos en la ENCC, y las metas priorizadas han sido previstas en la Contribución Nacional. Todo esto permitirá al Estado obtener objetivos estratégicos a largo plazo, articulados a los compromisos internacionales.

Por tanto, es necesario que se de el siguiente paso con la implementación de esta estrategia para alcanzar las metas previstas en la Contribución Nacional, además de realizar el monitoreo y reportes respectivos que permitan evaluar los avances y realizar los ajustes que sean necesarios.

Si bien durante los últimos años se han realizado diversos avances en lo que respecta a generación de políticas, planes e instrumentos para la gestión del cambio climático, aún hay mucho trabajo por hacer.

Es necesario crear marco político y normativo que permita integrar las políticas de cambio climático con los procesos de planificación a nivel nacional y sub nacional. Este marco político no solo debe considerar los objetivos en concreto, sino también la variedad de actores, sus funciones y responsabilidades, tanto desde el ámbito público, como el privado.

Para revisar el documento, ingresar al siguiente link: <http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2016/05/Tercera-Comunicaci%C3%B3n.pdf>

Un enfoque territorial es más idóneo para compensar a los pueblos

Servindi, 28 de setiembre, 2016.- El enfoque jurisdiccional o territorial es más idóneo para compensar a los pueblos indígenas por su importante contribución por la conservación de los bosques que un enfoque de REDD+ basado en proyectos.

Así se desprende de un artículo de Mike Gaworecki publicado en el portal Mongabay donde explica las limitaciones del enfoque tradicional de los proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los suelos (REDD+).

El artículo publicado originalmente en inglés y traducido por Servindi puntualiza que el enfoque de proyectos de REDD+ no siempre beneficia y potencia a los guardianes de los bosques.

En tal sentido, son los propios pueblos indígenas los que utilizan cada vez más el creciente reconocimiento de su papel como administradores superiores del bosque como palanca para desarrollar y presentar sus propias propuestas.

La finalidad es recibir más beneficios por su papel en la mitigación del cambio climático, y tener más control sobre esos beneficios para satisfacer sus propias necesidades y aspiraciones.

El informe menciona el Fondo Territorial Mesoamericano y el programa REDD+ Indígena Amazónico (RIA) como propuestas que "reducen la dependencia del pago a nivel de proyecto y maximiza la autonomía, beneficiando y recompensando los esfuerzos de mitigación del clima.

Para revisar el artículo original ingresar a la web de Mongabay:

<https://news.mongabay.com/2016/09/how-to-increase-redd-benefits-to-indigenous-peoples-and-other-traditional-forest-communities/>

Cómo aumentar los beneficios de REDD+ para los pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales de los bosques

Por Mike Gaworecki

Mongabay, 9 de setiembre, 2016.- Para cumplir con el objetivo establecido en el Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 2 grados Celsius, es crucial detener la deforestación tropical y fomentar la reforestación de los bosques tropicales que ya han sido talados. No sólo es la deforestación tropical y la degradación forestal la fuente del 10 al 15 por ciento de las emisiones globales de dióxido de carbono, sino que los bosques tropicales son un sumidero de carbono de gran valor que juega un papel muy importante en la regulación del clima global.

Se ha observado muchas veces antes que los pueblos indígenas y otras comunidades forestales que actúan como guardianes del bosque son importantes socios y aliados en los esfuerzos mundiales para frenar el cambio climático. Capacitar a las comunidades indígenas y forestales como administradores oficiales de sus territorios tiene un gran potencial climático: los pueblos indígenas y comunidades tradicionales poseen o han designado los derechos de uso de aproximadamente 18 por ciento de los bosques tropicales del mundo, lo que comprende más de 350 millones de hectáreas (alrededor de 865 millones de acres) en 30 países tropicales. Los

territorios indígenas representan más del 20 por ciento de las reservas de carbono de los bosques tropicales.

Cerca de 200 países firmaron el Acuerdo de París sobre el clima en diciembre, lo que consagró al programa de la ONU para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques, más comúnmente conocido como REDD+, como un artículo independiente. Sin embargo, de acuerdo con un nuevo informe y a pesar de las esperanzas de que REDD+ pudiera ser una fuente de financiación directa para reconocer y premiar la administración forestal practicada por las comunidades indígenas y tradicionales, sigue siendo difícil que reciban pagos directos bajo el sistema actual.

El informe es el resultado de dos años de investigación del Earth Innovation Institute y varias organizaciones asociadas, entre ellas Instituto del Bien Común, Inobu, Prisma, y Pronatura Sur. Los autores señalan que "las comunidades indígenas y otras dependientes de los bosques en muchas regiones han inhibido con éxito la deforestación a través de usos de suelo de una intensidad relativamente baja o mediante la protección activa de los límites y otras restricciones legales sobre la explotación de recursos naturales por forasteros".

Sin embargo, las comunidades indígenas y tradicionales muy rara vez disfrutan de los derechos sobre su propiedad territorial, lo que dificulta su capacidad para contribuir al programa de mitigación del cambio climático: "la claridad insuficiente sobre tenencia de la tierra, la superposición de reclamaciones, conflictos violentos y las desigualdades históricas constituyen obstáculos en el reconocimiento del papel de los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales en la conservación de los bosques", indica el informe.

REDD+ Jurisdiccional

El informe se esfuerza por responder la pregunta: "¿Cómo pueden los pueblos indígenas y comunidades tradicionales integrarse mejor en las estrategias de mitigación del cambio climático, recibir más beneficios por su papel en la mitigación del cambio climático, y tener más control sobre esos beneficios para satisfacer sus necesidades y aspiraciones?"

La respuesta es el enfoque jurisdiccional, o en todo el territorio, de REDD+ y del desarrollo rural de baja emisión (LED-R en inglés), según el informe. En un enfoque jurisdiccional para REDD + y LED-R, en contraposición a un enfoque basado en proyectos, todos los interesados en una región - incluyendo los gobiernos municipales, estatales y provinciales, así como los pueblos indígenas y comunidades tradicionales - se unen para crear planes de sostenibilidad para la gestión de las tierras bajo su control. Esto ayuda a garantizar que las prestaciones económicas de gobiernos extranjeros o de venta de créditos de carbono se distribuyen equitativamente entre todos los actores.

"REDD+ jurisdiccional ofrece una oportunidad para hacer frente a los retos sistémicos que a los que se enfrentan los pueblos indígenas y tradicionales, al estar sus casas en el bosque ante una amenaza creciente", dijo en un comunicado el director ejecutivo del Earth Innovation Institute, Dan Nepstad.

En algunos casos, REDD + ya ha beneficiado a los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales, según señala el informe. Por ejemplo está el proyecto Pater-Suruí REDD+ en Rondônia, Brasil estableció el primer fondo indígena de carbono, que a su vez ha ayudado a apoyar proyectos de infraestructura comunitaria como nuevas escuelas y clínicas, además de otros beneficios para la comunidad.

En términos más generales, los diálogos de REDD+ han ayudado a aumentar la conciencia de los derechos territoriales y los problemas de tenencia. En Panamá, por ejemplo, "la llegada de

ONU-REDD dio lugar a un diálogo nacional y la eventual delimitación de los derechos territoriales", indica el informe. Y a medida que las naciones y jurisdicciones sub-nacionales desarrollen sus propias estrategias REDD+, las salvaguardias ambientales y sociales se convierten cada vez más en características prominentes de los programas de conservación.

Sin embargo, estas historias de éxito son relativamente pocas en comparación con el número de programas de REDD+ que se están creando. Los beneficios repartidos por muchos programas de REDD+ están vinculados a las métricas de rendimiento bajo los llamados "pagos por servicios ambientales" o modelos de "pago por desempeño" que sólo compensan a las comunidades con reducción de emisiones verificables. Debido a que estos parámetros de rendimiento a menudo están vinculados a las tasas históricas de deforestación, a muchas comunidades indígenas y tradicionales se les penaliza como de "bajo rendimiento" en términos de reducción de emisiones.

Mientras tanto, muchos proyectos REDD+ no han respetado los derechos de las comunidades forestales indígenas y locales, no han implementado el Consentimiento Libre Previo e Informado (CLPI), o no se han establecido las salvaguardias ambientales y sociales. Algunos incluso no abordan las causas fundamentales de la deforestación, que a menudo se entrelazan con las amenazas a las comunidades indígenas y tradicionales, como la minería, la colonización y el desarrollo agrícola.

Hay una serie de otras razones por las cuales los programas de REDD+ no han logrado beneficiar a las comunidades indígenas y tradicionales, como los desacuerdos fundamentales acerca de la mercantilización de la naturaleza, el idioma y otras barreras logísticas y expectativas que no se alcanzan en cuanto a los beneficios financieros estimados al comienzo de un REDD+.

No obstante, los grupos indígenas están utilizando cada vez más el creciente reconocimiento de su papel como administradores superiores del bosque como palanca para desarrollar y presentar sus propias propuestas. El Fondo Territorial Mesoamericano, por ejemplo, quiere aprovechar una variedad de fuentes públicas y privadas para financiar los esfuerzos de conservación dentro de los territorios indígenas que han sido diseñados e implementados a través de alianzas territoriales. Por su parte, el programa REDD+ Indígena Amazónico (RIA) se encuentra actualmente en fase piloto después de haber sido desarrollado por la COICA, la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica.

"Estas propuestas reducen la dependencia del pago a nivel de proyecto para los modelos de rendimiento, maximiza la autonomía, sin embargo, permiten que [los pueblos indígenas] se beneficien de, y sean recompensados por los esfuerzos de mitigación del clima", según el informe.

"Para que las iniciativas de conservación forestal que sean sostenibles en el tiempo tienen que establecer relaciones directas con los que protegen los bosques ", dijo Cándido Mezua, Secretario de Relaciones Internacionales de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, en un comunicado.

"Esto puede ayudar a tener un mayor impacto y más beneficios, no sólo para los bosques, sino también para las personas. Son los pueblos indígenas y las comunidades locales quienes han luchado para proteger los bosques tropicales de Mesoamérica, el Amazonas y otras regiones del mundo y por lo tanto tiene que haber una integración formal de nuestras propuestas en diversas iniciativas de conservación forestal".

Traducción de Natalia León

¿Por qué la definición de "bosque" de la FAO lesiona a comunidades y bosques?



Servindi, 21 de setiembre, 2016.- Una carta pública difundida el 21 de setiembre, Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles, recordó cómo la definición de "bosque" de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) lesiona a los bosques y a las comunidades.

A pesar de los numerosos esfuerzos para que la FAO modifique su definición de bosques este organismo permite aún que un monocultivo industrial de árboles sea llamado "bosque".

Como señalan los promotores de la acción la FAO busca subestimar el hecho de que su definición favorece sobre todo a las grandes corporaciones de la madera y otras que promueven las plantaciones de árboles a gran escala.

Las plantaciones van en claro detrimento de las comunidades que dependen de sus territorios para su sustento y medios de vida.

El Congreso Forestal Mundial realizado el 2015 en Sudáfrica también permitió de la entrega de una carta a la FAO, que el organismo respondió minimizando la importancia e influencia que su definición ejerce.

La influencia que tiene la definición de la FAO afecta sobremanera en las definiciones nacionales así como en procesos internacionales tales como las negociaciones de las Naciones Unidas sobre el cambio climático.

A través de la Carta Abierta se exige que la FAO asuma su responsabilidad y ponga en marcha de inmediato un proceso de revisión genuino de su definición de bosque.

La carta es una de las acciones impulsadas por el Movimiento por los Bosques Tropicales (WRM, por su sigla en inglés), la organización Salva la Selva y TimberWatch.



¿De qué manera la definición de bosque de la FAO lesiona a comunidades y bosques?

Carta abierta a la FAO

Lanzada el 21 de septiembre, Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles

En septiembre de 2015, durante el XIV Congreso Forestal Mundial, miles de personas salieron a las calles en Durban, Sudáfrica, para protestar por la polémica definición de bosque que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) insiste en mantener (1). La definición de la FAO considera que el bosque es básicamente sólo "un conjunto de árboles", sin tener en cuenta otros aspectos fundamentales del bosque, en especial otras numerosas formas de vida tales como otros tipos de plantas, así como animales y comunidades humanas que dependen de los bosques. Del mismo modo, la definición desestima la contribución vital de los bosques a los procesos naturales que aportan el suelo, el agua y el oxígeno. Además, al definir al "bosque" exclusivamente en función de una superficie mínima de tierra cubierta por un número mínimo de árboles de un porcentaje mínimo de altura y cobertura forestal, la FAO ha promovido activamente el establecimiento de varios millones de hectáreas de plantaciones industriales de árboles, de especies principalmente exóticas, especialmente en el Sur global. Como consecuencia de ello, sólo se ha beneficiado un sector particular: la industria de las plantaciones de árboles. Las plantaciones industriales de árboles han sido la causa directa de numerosos impactos negativos en las comunidades locales y sus bosques, los cuales han sido bien documentados. (2)

En la manifestación de protesta que tuvo lugar en Durban hace un año había quienes llevaban pancartas que decían: ¡Las plantaciones no son bosques!, y terminaron frente a la sede del Congreso Forestal Mundial, organizado por la FAO. En respuesta a un llamamiento de los líderes de la sociedad civil que participaban en la manifestación, un funcionario del Congreso Forestal Mundial salió de la sede para recibir una petición firmada por más de 100.000 personas y grupos de todo el mundo. En la petición se pedía a la FAO que cambiara con urgencia su definición de bosque y que lo definiera por su verdadero significado. Pero una vez más, la FAO no cambió su definición.

No obstante, ocurrió algo nuevo. A diferencia del silencio como respuesta a demandas anteriores de que la FAO cambiara su errada definición de bosque, esta vez la FAO reaccionó a la protesta y envió una carta. Un punto en la carta de la FAO es particularmente interesante. Declaró: "De hecho, hay más de 200 definiciones nacionales de bosques que reflejan una variedad de partes interesadas en este asunto...", y continúa diciendo, "... para facilitar la comunicación de datos ..., es necesario que exista una categorización mundialmente válida, sencilla y operativa de los bosques", a fin de que "permita comparaciones coherentes durante períodos más largos sobre los procesos mundiales de desarrollo y cambio de los bosques". Con esto, la FAO intenta convencernos de que su función se limita a homologar las más de 200 definiciones diferentes de bosques que tienen los distintos países.

Pero ¿acaso es cierto, realmente, que la actual definición de bosques de la FAO no influyó, en primer lugar, en la forma en que se formularon las 200 definiciones nacionales de bosques? ¿Y tiene razón la FAO cuando aduce que las numerosas y diferentes definiciones nacionales de bosque son el resultado de las reflexiones de una serie de partes interesadas en estos países, minimizando así, una vez más, su propia influencia?

Creemos que lo cierto es lo contrario de que aduce la FAO. En primer lugar, la definición de bosque de la FAO fue adoptada hace mucho tiempo, en 1948. Según un reciente análisis conjunto de diferentes autores acerca de conceptos y definiciones de bosque, "la definición de

la FAO, acordada por todos sus miembros [de la ONU], es la primera que utilizaron todos los países para homologar los informes; la definición adoptada por la FAO sigue siendo la definición de bosque más utilizada hoy en día". (3)

Un país que sirve de buen ejemplo para verificar si se está utilizando la definición de la FAO, es Brasil, el país con la mayor cubierta forestal del hemisferio Sur, y según fuentes oficiales, con casi 8 millones de hectáreas de plantaciones industriales de árboles, en su mayoría monocultivos de eucaliptos. En su publicación de 2010 (4) "Florestas do Brasil" (Bosques de Brasil), el Servicio Forestal Brasileño, un departamento del Ministerio de Medio Ambiente y responsable de las cuestiones relacionadas con los bosques "... considera como bosque las tipologías de vegetación leñosa que más se aproximan a la definición de bosque de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)". Como continuación lógica a partir de basar su definición en lo definido por la FAO, se establece que "Brasil es un país ... de bosques naturales y plantados", donde por "bosques plantados" se hace referencia a los 8 millones de hectáreas de monocultivos mayormente de eucaliptos. Por lo tanto, la forma en que el gobierno de Brasil define un bosque no es el resultado de un proceso que "... refleja una variedad de partes interesadas en este asunto". Por el contrario, es más bien una consecuencia de lo que ya fue determinado por la FAO.

Pero la influencia que tiene la definición de bosque de la FAO va más allá de tan solo determinar las definiciones nacionales en esa materia. En estos tiempos de cambio climático, la definición de la FAO ha sido el principal punto de referencia para definir lo que es un bosque en el marco de la Convención de la ONU sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Al adoptar la estrecha definición de la FAO basada en el concepto de la presencia de madera, la CMNUCC también ha promovido la idea de que los bosques son una superficie de tierra que sólo contiene árboles. Para la CMNUCC, lo que importa son principalmente los árboles de un bosque, debido a su capacidad de almacenar carbono a medida que crecen, y no las comunidades que dependen de los bosques. Esas comunidades afectadas se han visto perjudicadas aún más por las restricciones al uso de los recursos del bosque impuestas por "los proyectos de compensación de carbono forestal", también denominados a menudo proyectos REDD+.(5) Una definición de bosque centrada exclusivamente en los árboles abre la puerta a la inclusión de los "bosques plantados" - léase: plantaciones industriales de árboles -. Es una manera totalmente falsa de "reducir la deforestación y la degradación de los bosques" pero que se acepta como opción válida en el Convenio sobre el Cambio Climático, por la que supuestamente el carbono puede ser secuestrado de la atmósfera y ser almacenado de forma permanente. En la práctica esto es sólo otra oportunidad de lucro para la industria de las plantaciones de árboles, y resulta una gran amenaza para las comunidades afectadas por la tendencia a expandir plantaciones de árboles para la función de "sumideros de carbono".

Tras las últimas negociaciones de la CMNUCC, recientemente los países han estado modificando su legislación forestal, con la esperanza de atraer a los llamados "fondos para el clima". Como era de esperar, las definiciones utilizadas se basan en gran medida en la definición de bosque de la FAO. En Mozambique, por ejemplo, en un taller realizado sobre REDD+, un consultor propuso una nueva definición de bosque para el país. Al igual que la definición de la FAO, también se basa en la presencia de árboles, definiendo que un bosque es una superficie con "... Árboles con el potencial de alcanzar una altura de 5 metros en la madurez ..." También en Indonesia, la presentación del Ministerio de Medio Ambiente y Bosques a la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático, en 2015, declaraba que, para definir sus bosques, se había "... ajustado a la definición de bosque de la FAO ...". Una vez más, una definición que define y valora un bosque exclusivamente a través de sus árboles, y que divide a los "bosques" en una serie de categorías diferentes, entre ellas "bosque natural" y algo que llaman "bosques de plantación". (6)

La definición de bosque de la FAO también influye en las acciones de las instituciones financieras y de desarrollo que promueven actividades a partir de la madera, como la tala industrial de bosques, las plantaciones industriales de árboles y las compensaciones de carbono REDD+. El principal ejemplo es el Banco Mundial, que como parte del conglomerado de las Naciones Unidas se ha asociado con la FAO durante décadas en una serie de iniciativas relacionadas con los bosques. Recientemente, unieron nuevamente sus fuerzas en uno de los planes más ambiciosos lanzados durante la COP 21 de la CMNUCC en París, la llamada “Iniciativa Africana de Restauración de Paisajes Forestales” (AFR100). (7) Dicha iniciativa pretende abarcar 100 millones de hectáreas de tierras deforestadas a las que se denominan “degradadas” en diferentes países africanos boscosos. El Banco Mundial proporcionará mil millones de dólares para este plan. Pero para comprender lo que el Banco Mundial considera como “reforestación”, es crucial ver cómo el propio Banco define un bosque. Como cabía esperar, su definición también está tomada de la de la FAO, y describe un bosque como “una superficie de tierra ... con cobertura (o nivel de espesura equivalente) de más del 10%, con árboles que ...” (8) Al definir a los bosques de esta manera, el Banco Mundial abre la puerta de par en par para que las empresas que expanden sus plantaciones de monocultivos de árboles en gran escala en los territorios de las comunidades de África, formen parte del ambicioso plan de “restauración” que promueve junto con la FAO y otros socios. La propuesta AFR100 se parece mucho al fallido Plan de Acción Forestal en los Trópicos (PAFT) de la década de 1980, que también fue ideado por el Banco Mundial en colaboración con la FAO.

Observaciones finales

Es imperioso que la FAO deje de presentar engañosamente a las plantaciones industriales de árboles como “bosques plantados” o “Silvicultura”, porque los gobiernos nacionales, otras instituciones de la ONU y las instituciones financieras, así como los principales medios de comunicación, seguirán su infeliz ejemplo. Esta forma deliberada de confundir las plantaciones de árboles con bosques engaña a la gente, porque en general los bosques son vistos como algo positivo y beneficioso. Después de todo, ¿quién podría oponerse a los “bosques”?

Por sobre todas las cosas, la FAO debería asumir plena responsabilidad por la fuerte influencia que su definición de “bosque” tiene sobre las políticas económicas, ecológicas y sociales en todo el mundo. La petición 2015 que fue presentada a la FAO en Durban declara que la FAO se describe en sus principios fundacionales como un “foro neutral donde todas las naciones se reúnen como iguales”. El cumplimiento de este enunciado exige, entre otras cosas, que la FAO revise urgentemente su definición de bosque, y que de una definición que refleja las preferencias y perspectivas de las empresas de la madera, la celulosa y el papel, el caucho y el comercio de carbono, pase a una definición que refleje las realidades ecológicas así como las opiniones de los pueblos que dependen de los bosques. A diferencia de la influencia dominante que actualmente tienen las industrias de la madera en la FAO, un proceso transparente y abierto para establecer definiciones nuevas y apropiadas de bosques y plantaciones de árboles también debe dar participación de manera efectiva a las mujeres y los hombres que dependen directamente los bosques y, por tanto, los protegen.

Notas:

(1) “Land with tree crown cover (or equivalent stocking level) of more than 10 percent and area of more than 0.5 hectares (ha). The trees should be able to reach a minimum height of 5 meters (m) at maturity in situ.”

(2) Ver más en: <http://wrm.org.uy/es/listado-por-temas/plantaciones-de-arboles/>

(3) Chazdon, R.L., Brancalion, P.H.S., Laestadius, L. et al. Ambio (2016). doi:10.1007/s13280-016-0772-y. When is a forest a forest? Forest concepts and definitions in the era of forest and landscape restoration (<http://link.springer.com/article/10.1007/s13280-016-0772-y>)

(4) http://www.mma.gov.br/estruturas/sfb/_arquivos/livro_portugus_95.pdf

(5) Ver más en: <http://wrm.org.uy/es/libros-e-informes/redd-una-coleccion-de-conflictos-contradicciones-y-mentiras/>

(6) http://www.greenpeace.org/international/Global/seasia/Indonesia/pdf/FREL_Report.pdf

(7) <http://www.wri.org/our-work/project/AFR100/about-afr100>

(8) <http://tinyurl.com/hsb6cwy>

La nueva medida de todas las cosas: el carbono

Por Silvia Ribeiro*

ETC Group, 23 de agosto, 2016.- La devastación ambiental que caracteriza nuestro tiempo no tiene precedentes en la historia del planeta ni las culturas. Ha habido civilizaciones que han provocado desastres ambientales, pero nunca antes se habían mundializado, desequilibrando los propios flujos y sistemas naturales que sostienen la vida en el planeta. El capitalismo y su “civilización petrolera”, el modelo de producción y consumo industrial, basado en combustibles fósiles (petróleo, gas, carbón) provocó este desastre en poco tiempo, acelerado en las últimas décadas.

Los problemas ambientales son graves, con fuertes y desiguales impactos sociales y el cambio climático es uno de los principales. Pero no son causados por toda “la humanidad”. Más que la era del antropoceno, como algunos la llaman, vivimos la era de la plutocracia, donde todo se define para que los muy pocos ricos y poderosos del mundo puedan mantener y aumentar sus ganancias, a costa de todo y todos los demás. Esta absurda injusticia social, económica, ambiental, política, requiere de muchas armas para mantenerse y una de ellas es la guerra conceptual. Inventar conceptos que oculten las causas y características de la realidad, que desvíen la atención de la necesidad de cambios reales y profundos y mejor aún, que sirvan para hacer nuevos negocios a partir de las crisis.

En este contexto, el ensayo *La métrica del carbono: ¿el CO2 como medida de todas las cosas?* de Camila Moreno, Daniel Speich y Lili Fuhr, editado recientemente por la Fundación Heinrich Böll, es un aporte importante.

Muestra cómo ante la convergencia de graves crisis ambientales locales, regionales y globales, junto a las crisis económicas y financieras, se echa un fuerte foco de luz sobre el cambio climático – que Nicholas Stern llamó “la mayor falla de mercado que el mundo ha atestiguado”, al tiempo que se posicionan las unidades de CO2 (dióxido de carbono) como medida para definir la gravedad del problema y sus posibles soluciones. Así, otros temas quedan en la oscuridad del contraste de ese rayo de luz y todo se reduce a contar emisiones de CO2 a la atmósfera. Las autoras no dejan duda de que el cambio climático es real y grave, pero cuestionan “¿Es más importante y más urgente que la pérdida de biodiversidad, la degradación del suelo cultivable, el agotamiento del agua dulce? ¿Acaso es posible considerar cada uno de estos fenómenos como algo independiente y separado de los otros?”.

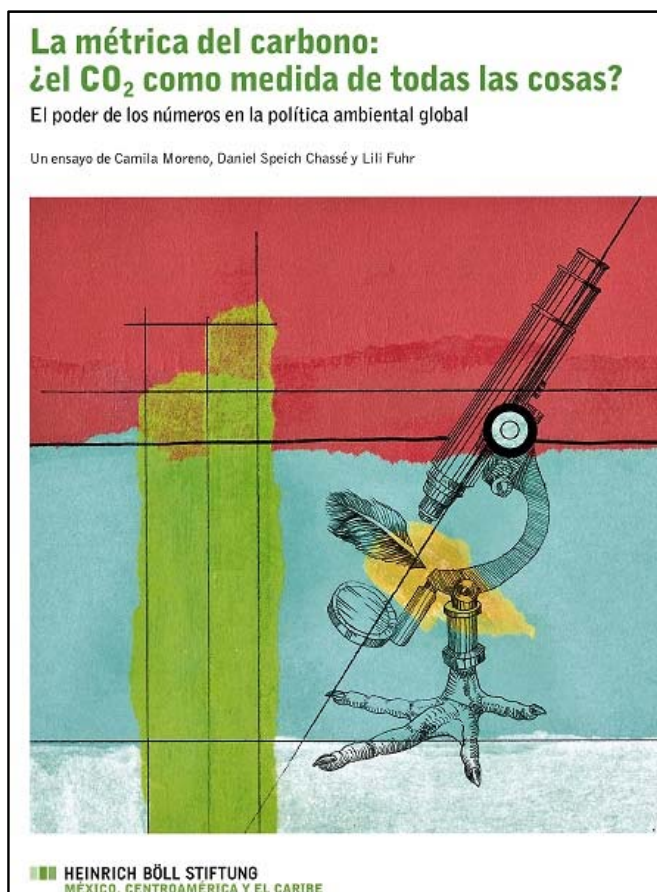
“La manera cómo describimos y enmarcamos un problema, determina en gran medida el tipo de soluciones y respuestas que podemos considerar”, plantean. Justamente debido a la

gravedad de la crisis ambiental, tenemos que evitar este “epistemicidio ecológico” en curso que reduce la óptica, elimina conocimientos y destruye alternativas.

Se sabe bien cuáles son las causas del cambio climático, y los principales rubros industriales que lo provocan: alrededor del 80 por ciento se debe a la explotación y generación de energía, al sistema alimentario agroindustrial y al crecimiento urbano (construcción, transporte), basados en el uso y quema de petróleo, gas y carbón. Todo esto emite CO₂ y otros gases de efecto invernadero (GEI), metano, óxido nitroso y otros.

Se sabe también que lo necesario son reducciones reales, en su fuente y en la demanda, de todos esos gases y cambiar las causas que las originan. Y se sabe que existen alternativas reales, diversas, descentralizadas y viables; quizá el ejemplo más fuerte es que 70 por ciento de la humanidad se alimenta de agricultura campesina y agroecológica, pescadores artesanales y huertas urbanas, que no emiten gases de efecto invernadero.

Pero las propuestas dominantes —de instituciones y gobiernos— no son éstas, sino otras principalmente basadas en mercados de carbono y altas tecnologías que permitirían seguir emitiendo GEI como siempre, al ser “compensados” absorbiendo el carbono emitido y almacenándolo en fondos geológicos, es decir, formas de geoingeniería.



Libro editado recientemente por la Fundación Heinrich Böll puede ser descargado desde la siguiente dirección web: <http://mx.boell.org/es/metrica-del-carbono>.

La propuesta de “compensación” (offset en inglés) se viene desarrollando hace años, asociada a los esquemas de pagos por servicios ambientales, por biodiversidad, etc, componentes esenciales de la llamada “economía verde”. Se trata de justificar la destrucción en un lugar, mientras en otros se supone la “compensan” con algún pago, como si fuera lo mismo dejar sin bosques o agua a un pueblo entero en un país o región, porque hay una comunidad que los cuida en otra parte. Esos pagos generan “bonos”, instrumentos financieros especulativos que son comerciados en mercados secundarios.

Ahora, para que todo pueda ser medido en unidades de CO₂, todos los gases se traducen a la abstracción de “CO₂ equivalente”, sin considerar si se trata de gases emitidos por una trasnacional minera que devasta ecosistemas y pueblos, por la quema de un bosque o el estiércol de algunos animales de un pastor. El concepto de “cero emisiones netas”, no reducciones reales sino compensadas, completa esta operación (<http://www.etcgroup.org/es/content/emisiones-netas-cero-ni-netas-ni-cero>). De esta forma, la “economía del carbono” podría englobar todos los rubros anteriores, para convertirse en la nueva “moneda” de cambio, que justifica la contaminación y produce ganancias para quienes la causan.

No solamente se pierden de vista las causas del cambio climático, también de esta forma, se simplifica burdamente la consideración de los otros graves problemas ambientales y las interacciones entre todos ellos y se eliminan del campo de análisis y acción los impactos sociales, el sistema que los provoca y las verdaderas soluciones.

*Por Silvia Ribeiro es investigadora del Grupo ETC.

Fuente: ETC Group: <http://www.etcgroup.org/es/content/la-nueva-medida-de-todas-las-cosas-el-carbono>

“Más que carbono, RIA es vida y cultura”

Servindi, 23 de junio, 2016.- La estrategia de acción climática denominada REDD+ Indígena Amazónica (RIA) fue expuesta por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) en un seminario taller realizado en Iquitos, capital de Loreto, donde participaron líderes indígenas, funcionarios y organizaciones aliadas.

El evento “REDD+ Indígena Amazónico, Salvaguardas y REDD+” se efectuó del 31 de mayo al 2 de junio y en él se destacó que RIA no es un proyecto, no es una idea, sino una estrategia de acción climática de AIDESEP en el marco del diálogo ambiental climático mundial.

El certamen congregó a cuarenta representantes indígenas de las regiones de Loreto, San Martín, Madre de Dios, así como de la Coordinadora Indígena de la Cuenca Amazónica (COICA), a funcionarios de gobiernos regionales, del “Programa Nacional de Bosques del Ministerio del Ambiente (MINAM) y a representantes de ONGs como Conservación Internacional y WWF.

La finalidad del evento fue compartir los principios de RIA como alternativa para asegurar la vida y el territorio indígena para las futuras generaciones. y sobre esta base replicar esta iniciativa indígena en otras regiones donde se encuentra la organización nacional AIDESEP.

Según un reporte de la AIDESEP las discusiones en torno al tema ambiental fortalecieron algunos conceptos y pusieron en polémica a otros.

Más allá del carbono

REDD+ indígena amazónico (RIA) es la adecuación intercultural de REDD+, redefinida en relación a la cosmovisión indígena y al reconocimiento de sus derechos colectivos, que les permita a los pueblos originarios decidir, controlar y construir las estrategias de su propio desarrollo.

Se trata de una propuesta de gestión holística del territorio para lograr la vida plena, pues valora la integridad de los servicios y funciones ecosistémicos de los bosques y territorios indígenas que comprende el (agua, el aire, la biodiversidad, los suelos, el clima, los saberes ancestrales y la espiritualidad, entre otros).

En tal sentido RIA va más allá de la captura de carbono en áreas con mayor amenaza de deforestación, degradación y destrucción.

Entre los ejes centrales de RIA está la gestión holística del territorio para la conservación, la reducción de la huella ecológica y la reducción de los grandes impulsores de la deforestación y la degradación.

Los participantes enfatizaron que RIA es ejercer la libre determinación en nuestros territorios asegurados legalmente, reducir de forma efectiva los gases de efecto invernadero pero a la vez el mundo industrializado debe cambiar su modelo económico-industrial-extractivista. Si no hay avances efectivos en este propósito los esfuerzos por reducir los efectos del cambio climático no servirán, coincidieron.

Extender RIA en la Amazonía

El evento destacó la experiencia de la cogestión que ha dado resultados importantes por ejemplo en la experiencia de la Reserva Comunal Amarakaeri (RCA).

Jaime Corisepa, en representación del Ejecutor del Contrato de Administración de la RCA, explicó cómo ahora se cuenta con un plan maestro que prioriza la gobernanza y el derecho territorial. "Somos entes activos de la verdadera conservación de bosques" afirmó.

Los representantes indígenas quienes participaron de un intenso diálogo y resolvieron iniciar el proceso para implementar RIA en la Reserva Comunal Airo Pai, ubicada en la provincia Putumayo, en la región Loreto.

Destacaron la elevada biodiversidad de dicha reserva que debe ser protegida así como las buenas relaciones con el Servicio de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP).

Del mismo modo, decidieron impulsar procesos similares en el área del Corredor ecológico del pueblo Awajún del Alto Mayo, ubicada en la jurisdicción de la Coordinadora de Pueblos Indígenas de la Región San Martín (CODEPISAM).

Asimismo, la Concesión de Conservación Bosques de Angaiza y la Comunidad Nativa Yurilamas, coordinada directamente por la Federación de los Pueblos Indígenas Kechwas de la Región San Martín (FEPIKRESAM), una federación indígena activa afiliada a la CODEPISAM y que cuentan con plan de manejo forestal vigente.

La Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas San Lorenzo (CORPI SL) si bien contribuye de forma precisa a la estrategia de RIA a través del manejo de los territorios integrales por los pueblos indígenas, sin embargo, aclaró que no están a favor de la modalidad Área Natural Protegida (ANP) por considerarla no efectiva en la conservación y manejo sostenible de bosques.

"El presupuesto de las ANP es de 80 millones de soles pero ningún funcionario vive ahí, de manera permanente, para cuidar y manejar de forma sostenible estos bosques. Lo que hace las ANP es recortar derechos ancestrales, ya que hasta nos prohíben de cazar o pescar dónde siempre lo hemos hecho sin depredar" denunció George Cuñachi, técnico especialista de CORPI SL.

La enorme contribución de los pueblos indígenas amazónicos

El Perú, según datos oficiales del Ministerio del Ambiente pretende reducir en 67 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero al año 2030. Al respecto Henderson Rengifo, presidente de la AIDESEP, destacó que los pueblos indígenas continuarán efectuando su aporte a la lucha climática defendiendo los bosques y conservando la biodiversidad.

"Con o sin plata de por medio, nosotros seguiremos conservando y viviendo en integralidad con el bosque", agregó. "Sin embargo, es urgente también que los países que más emiten los gases de efectos invernaderos digan de una vez si cambiarán o no su modelo energético. Ya estamos cansados de tanto paseo" manifestó Rengifo.

Jamner Manihuari, vicepresidente de la AIDESEP dijo que el Estado peruano y la comunidad internacional deben agradecer el aporte de los pueblos indígenas a la construcción de estos instrumentos de gestión sobre el cambio climático.

Desde esos aportes de los pueblos se deben promover políticas para los pueblos indígenas y fortalecer todos los niveles de capacidades para seguir protegiendo el bosque. "Los pueblos indígenas no sólo aportamos, sino también asumimos la responsabilidad de seguir contribuyendo con la adaptación y mitigación del cambio climático" aseguró Manihuari.

Por otra parte, Roberto Espinoza, asesor de la AIDESEP, recomendó que lo que se ha logrado hasta ahora en materia climática ambiental con el Ministerio del Ambiente no debe perderse y que desde los pueblos indígenas se deben dejar acuerdos sobre políticas públicas de calidad que deben ser respetadas por cualquier gobierno de turno.

Espinoza enfatizó que son los pueblos quienes enfrentan cotidianamente la deforestación, la minería ilegal, los múltiples daños ecológicos y los numerosos atentados en contra de la cultura, entre otras amenazas a la sostenibilidad de los bosques y sus ecosistemas.

Un lema que resumió el sentir de los participantes es que "Si no hay árboles, no hay agua y si no hay agua no hay vida". De esta manera se reforzó la estrecha relación entre los pueblos y la Madre Tierra y la necesidad de afirmar el concepto "vida plena".

¿Qué es la DCI y por qué es importante?

Por Cristina Sánchez

Servindi, 18 de junio, 2016.- Desde hace algunos años, diversas instituciones nacionales e internacionales han unido fuerzas para conservar los bosques de la Amazonía peruana a través de un enfoque de desarrollo sostenible. A raíz de esto, se vienen llevando algunas actividades y reuniones en el marco de la Declaración Conjunta de Intención (DCI). Pero, ¿qué contempla esta declaración?

Cómo empezó todo

Con más de la mitad del territorio cubierto por bosques, el Perú posee la segunda extensión de Amazonía en el mundo. También, tiene uno de los cinco bosques tropicales más grandes, biodiversos y mejor preservados del planeta. Asimismo, se calcula que dicho territorio alberga a más de 350 mil personas de pueblos indígenas, incluyendo poblaciones en aislamiento y no contactadas o en contacto inicial.

Pero toda esta diversidad y ecosistemas tropicales, conocidas como la Amazonía, se encuentran en riesgo debido al cambio climático y los altos índices de deforestación y degradación de su suelo. Se estima que anualmente se deforestan 118 mil hectáreas de bosque, lo cual contribuye a la emisión de gases efecto invernadero (GEI) y, por ende, a aumentar la temperatura del planeta.

Es por este motivo que se vienen realizando diversas iniciativas para conservar los bosques amazónicos y lograr un desarrollo sostenible de la región. Uno de ellos es la alianza establecida entre Noruega, Alemania y Perú con el objetivo de reducir significativamente las emisiones de GEI que se producen en la Amazonía peruana.

Cabe resaltar que dichos países reconocen su participación en diversos convenios como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el Protocolo de Kioto, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación, entre otros.

Es así que el 22 de septiembre del 2014, durante la Semana del Clima celebrada en Nueva York, el Gobierno del Reino de Noruega, el Gobierno Federal de Alemania y el Gobierno de la República de Perú se comprometieron a luchar contra el cambio climático firmando un documento denominado Declaración Conjunta de Intención (DCI).

De las buenas intenciones a los hechos

“Vamos a pasar de buenas intenciones a hechos”, son algunas de las declaraciones que los firmantes hicieron. Esto debido a que, hasta la fecha, los compromisos establecidos en la mayoría de los convenios internacionales no habían sido respaldados con acciones concretas.

El documento contempla respetar los derechos y propósitos de las comunidades indígenas aumentando a 5 millones de hectáreas las áreas tituladas para ellos. También, incluir por lo menos 2 millones de hectáreas a manera de pago por las acciones de conservación. Por este motivo, gran parte de la donación está dirigida a facilitar la titulación de los territorios de comunidades indígenas de la región San Martín y Ucayali.

Asimismo, este documento selló el compromiso directo del Estado peruano en colaborar con la implementación de proyectos relacionados a REDD+ y el desarrollo sostenible de la Amazonía. Todo esto, a través de su Programa Bosques y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR).

La DCI

La Declaración Conjunta de Intención tiene como principales objetivos contribuir a reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero en el Perú, contribuir a lograr la meta de emisiones netas cero derivadas de la categoría de uso de suelo, cambio de uso de la tierra y bosques en el Perú para el 2021 y contribuir también a la meta nacional de reducir la deforestación en un 50 por ciento para el 2017; y finalmente, contribuir al desarrollo sostenible en sectores agrícolas, forestales, y minería ambientalmente adecuada en el Perú.

Para esto, el proyecto ha sido dividido en 3 fases:



En lo que respecta a la participación de los países firmantes, Noruega es la parte que se encargará del financiamiento del proyecto. Se ha establecido que la contribución será de 300 millones de USD, pudiendo ser utilizados solo 50 millones de USD durante la fase 1 y 2. De esta forma, queda establecido que el resto, 250 millones de USD, serán para la fase 3 que representan las contribuciones por reducción verificada de emisiones.

Cabe resaltar, que dichas contribuciones se encuentran sujetas a que el Gobierno peruano cumpla los objetivos de las fases 1 y 2. De ser así, dicho dinero podría ser entregado en el periodo de la fase 3, que va desde el 2017 hasta el 2020.

Por su parte, Alemania ya desarrolla actualmente una cooperación con el Perú en lo que respecta a temas climáticos, forestales y de desarrollo rural. Aún así, se puede considerar que en un futuro se sume como un ente financiador.

Finalmente, este compromiso también cuenta con la participación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) quien brindará asistencia técnica en lo que respecta a desarrollar un adecuado mecanismo fiduciario y financiero, alinear y asegurar consistencia a la hora de implementar el documento y apoyar en la creación de una plataforma de coordinación entre las agencias que trabajan el tema de REDD+ en Perú y la comunidad internacional.

¿Qué es lo que se viene?

La primera fase, la de preparación, se desarrolló desde el año 2014 y, como se puede apreciar en el gráfico anterior, se ha concentrado en preparar las bases para una correcta implementación de las siguientes fases de la DCI.

Actualmente el proyecto se encuentra en la segunda fase, la de transformación y si bien ya se han realizado algunas actividades, el Gobierno peruano y el Programa Bosques aún se encuentra frente a un gran reto: diseñar la matriz e indicadores de esta fase.

Por esto, desde hace algunas semanas se han venido llevando a cabo reuniones con distintos grupos de interés como la sociedad civil, el sector privado y organizaciones indígenas. Esto con el objetivo de incluir sus sugerencias en la matriz. En esta fase se espera revertir algunas acciones que no contribuyen a la conservación de los bosques y establecer el escenario adecuado para implementar las salvaguardas.

Luego de cumplida esta fase, se espera implementar la tercera desde el año 2017, otorgando las contribuciones económicas hasta el año 2021. Se tiene claro que para llegar a esta fase es necesario lograr sinergia entre los grupos de interés y transformar la realidad ambiental de la región amazónica peruana.

Apuestan por incluir enfoque indígena en la gestión de los bosques

Servindi, 24 de mayo, 2016.- La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) implementará en Colombia, Ecuador, Perú un proyecto que busca incorporar la visión integral y holística de los pueblos indígenas en la gestión de los bosques frente al cambio climático.

El proyecto, llamado también “REDD+ Indígena Amazónico (RIA), fue creado por la COICA y WWF Alemania, junto a los WWF de los países implicados y Brasil. Así lo reportó la cadena informativa alemana Deutsche Welle (DW).

El proyecto expuesto en el marco de las negociaciones climáticas que se llevan a cabo en Bonn, Alemania, cuenta con un presupuesto de 2.750.000 euros para el periodo 2014-2017 y está financiado en un 90 por ciento por el Ministerio de Medio Ambiente alemán a través de la Iniciativa Internacional de Protección del Clima (IKI). WWF aporta el 10 por ciento restante.

Según explicó Ricardo Burgos, director de RIA, el origen del concepto alternativo a REDD+ surgió en la Cumbre Amazónica de 2011 y una de sus principales características es que va más allá de la captura del carbono al incluir otros bienes y servicios que aportan los bosques y los territorios indígenas.

“REDD+ solo consideraba pérdidas, es decir, los bonos de carbono y no había otro espacio. RIA lo ha abierto y lo ha ampliado teniendo un impacto fuerte porque esos puntos están en el acuerdo de París”, aseguró el director de RIA.

El proyecto se centra en “generar conocimiento sobre la contribución de los territorios indígenas a la adaptación, mitigación y resiliencia al cambio climático, fortalecer la gobernanza de los territorios indígenas y sensibilizar a las políticas nacionales”.

La COICA es la organización central de las organizaciones indígenas de la Amazonia, y los territorios indígenas de la Cuenca Amazónica representan un 25 por ciento del total de la zona y almacenan entre 30 y 46 millones de toneladas de carbono.

A continuación reproducimos el reporte completo de la Deutsche Welle difundido el 23 de mayo de 2016:

Colombia, Ecuador y Perú apuestan por incluir un enfoque indígena en la gestión de los bosques

A través del proyecto “Inclusión de elementos claves de la propuesta indígena sobre REDD+ en la Amazonía”, Colombia, Ecuador y Perú están trabajando para incorporar un enfoque indígena en sus programas REDD+

Según la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), la organización central de las organizaciones indígenas de la Amazonia, los territorios indígenas de la Cuenca Amazónica, que representan un 25% por ciento del total de la zona, contienen bosques que almacenan entre 30 y 46 millones de toneladas de carbono. En este contexto y teniendo en cuenta el potencial de mitigación al cambio climático que representan estos territorios, la COICA formuló una primera propuesta indígena acerca de REDD+, el mecanismo de mitigación de Naciones Unidas.

El proyecto, llamado también “REDD+ Indígena Amazónico (RIA), fue creado por la COICA y WWF Alemania, junto a los WWF de los países implicados y Brasil. Con un presupuesto de 2.750.000 euros para el periodo 2014-2017, está financiado en un 90% por el Ministerio de Medio Ambiente alemán a través de la Iniciativa Internacional de Protección del Clima (IKI) mientras que WWF aporta el 10% restante.

El origen de este concepto alternativo a REDD+ surgió en la Cumbre Amazónica de 2011, según explicó Ricardo Burgos, Director de RIA, que presentó los últimos avances del proyecto en las negociaciones climáticas que se están llevando a cabo en Bonn esta semana. Burgos recordó que RIA se centra en “generar conocimiento sobre la contribución de los territorios indígenas a la adaptación, mitigación y resiliencia al cambio climático, fortalecer la gobernanza de los territorios indígenas y sensibilizar a las políticas nacionales”.

Una de las principales características del enfoque indígena es una visión integral y holística del cambio climático que va más allá de la captura del carbono en la que se incluyen otros bienes y servicios que pueden aportar los bosques y los territorios indígenas. “REDD+ solo consideraba pérdidas, es decir, los bonos de carbono y no había otro espacio. RIA lo ha abierto y lo ha ampliado teniendo un impacto fuerte porque esos puntos están en el acuerdo de París”, aseguró el director de RIA.

Cerca de 2 millones de hectáreas afectadas

El proyecto se lleva a cabo en diversos territorios indígenas de los tres países implicados que se encuentran en diversas fases. En Colombia este año se comenzó a adaptar implantar el concepto holístico en el Registro indígena de Predio Putumayo, comunidad La Chorrera, que cuenta con una extensión de 1 millón de hectáreas. Igualmente, se están haciendo estudios de campo sobre biodiversidad, carbono y amenazas al bosque. Mientras en Ecuador, cuyo terreno no está establecido pero abarcará un área más de 250.000 hectáreas, está llevando a cabo actividades de capacitación desde el año pasado.

En Perú está mucho más clara la estrategia de gobernanza para la implantación”, apuntó Burgos. En la reserva comunal de Amarakaeri, de 540.000 hectáreas, se está trabajando con un sistema de enfoque de administración indígena en los contratos de la gestión de la reserva. Igualmente, se han llevado a cabo estudios ambientales y un mapa cultural, entre otras acciones.



Foto: Picture - alliance/ wildlife

Visión regional con componente internacional

Aunque el primer problema de los pueblos indígenas es el derecho de la tierra, RIA cuenta con complicaciones particulares como las grandes distancias y la escasez de transporte en el área, así como las diferencias culturales, la generación de información técnica como índices de deforestación o la variabilidad de los datos que hacen referencia la tasa de renovación de bosques. No obstante, para Burgos lo más difícil es “lograr establecer procesos de diálogo con los países ya que puede haber muchas sensibilidades de cada una de las partes”.

Además de la fuerte visión regional, el proyecto también incluye un componente internacional incluyendo la participación de líderes indígenas amazónicos en los espacios de negociación internacional. “Con poco tiempo, el proyecto ya influyó en el Acuerdo de París. El artículo 5 sobre bosques tiene que ver con la agenda indígena y ya se han considerado nuestros puntos de vista indígenas”, destacó Burgos. No obstante, “debería haber mecanismos que expliciten el aporte de los pueblos indígenas en el cambio climático, especialmente en los territorios de bosques”, añadió. Igualmente, consideró vital mantener los derechos indígenas en los textos, quienes con “su simpleza de vida en bajas emisiones hacen posible un mundo habitable”.

Fuente: DW: <http://www.dw.com/es/colombia-ecuador-y-per%C3%BA-apuestan-por-incluir-un-enfoque-ind%C3%ADgena-en-la-gesti%C3%B3n-de-los-bosques/a-19275495>

¿Quién asume realmente los costos de REDD+?

Un estudio próximo a publicarse evidencia quién realmente está afrontando los costos de ejecución de REDD+.

Por Michelle Kovacevic

30 de mayo, 2016.- Un estudio de próxima publicación del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR), encontró que son las instituciones gubernamentales, locales y nacionales, de las jurisdicciones en las que se implementa REDD+, las que asumen los costos de ejecución. Esto podría poner en riesgo la viabilidad de la ampliación del esquema REDD+ (Reducción de Emisiones causadas por la Deforestación y Degradación de los bosques) en los próximos años.

“Este es uno de los primeros estudios para caracterizar a las instituciones y a los actores involucrados que afrontan los costos de las iniciativas subnacionales de REDD+ en los trópicos. Esto es realmente un análisis objetivo”, sostiene Cecilia Luttrell, asociada sénior de CIFOR y una de las autoras principales del estudio.

“Muchas iniciativas de REDD+ han estado trabajando bajo la presunción de que los costos de la reducción de la deforestación serían cubiertos por los fondos aportados por la comunidad internacional y que REDD+ generaría un excedente que podría ser distribuido en forma equitativa entre los actores involucrados”, afirma.

Sin embargo, una de las conclusiones más resaltantes es que el 84 por ciento de las instituciones gubernamentales subnacionales implicadas en las iniciativas de REDD+ estudiadas están invirtiendo más de lo que obtienen de REDD+.

“Puede que esto sea producto de su voluntad de posicionarse de forma tal que puedan captar fuentes de financiamiento para REDD+ o, simplemente, porque reconocen los beneficios locales derivados de la conservación forestal”, sostiene Luttrell.

“Sin embargo, en el corto plazo, deberán afrontar los costos reales”.

El estudio sale a la luz en un momento crítico para el financiamiento basado en los resultados: los negociadores climáticos se reunieron la semana pasada en Bonn, Alemania, para comenzar a sentar las bases necesarias para la ejecución del Acuerdo de París.

El precio del carbono

Se espera que el Fondo Verde para el Clima brinde una importante fuente de financiamiento para REDD+. En este sentido, una pregunta clave frente al plan del Fondo es cómo debe fijarse el precio del carbono.

“Si se subestiman los costos de REDD+, se corre el riesgo de que el precio fijado para el carbono no cubra los costos reales”, afirma Luttrell.

El principal objetivo de REDD+ es proporcionar incentivos económicos positivos a las poblaciones de los países en desarrollo para la conservación de los bosques y, de tal modo, para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Uno de los [supuestos clave](#) de REDD+ es que la reducción de las emisiones de carbono a partir de la deforestación es más económica que la reducción de otros sectores, tales como el transporte y la producción energética.

Desde hace tiempo se critican las estimaciones de los [costos de REDD+](#) por excluir los gastos de transacción y ejecución y por [subestimar las actividades informales de los mercados](#), tales como la agricultura de subsistencia.

De tres en tres

El costo total que supone para un país evitar la deforestación y la degradación puede dividirse en tres: costos de oportunidad, transacción e implementación.

El **costo de oportunidad** de REDD+ es la ganancia a la que se renuncia por conservar los bosques. Por ejemplo, una familia que vende carbón de leña como forma de subsistencia perderá este ingreso si el proyecto de REDD+ les prohíbe la extracción de madera para la producción de carbón. Conocer estos costos es fundamental para calcular qué ingresos debe brindar REDD+ para que los usuarios de la tierra abandonen en forma voluntaria la deforestación. Esto generalmente se calcula en USD por hectárea.

El **costo de implementación** de REDD+ es el costo que supone llevar a cabo un proyecto de REDD+, incluidos los costos administrativos y operativos. Por ejemplo, los talleres y las consultas a la comunidad para generar consenso con respecto al uso de la tierra generarán gastos de salario y de transporte. Cabe destacar que los costos de implementación han sido ignorados o subestimados en los debates sobre políticas, en parte porque la incertidumbre sobre el diseño de REDD+ los vuelve difíciles de calcular.

El **costo de transacción** de REDD+ es el costo de participar en el mercado de carbono. Esto incluye la negociación y el cumplimiento legal de los contratos, la supervisión y la verificación del almacenamiento de carbono y la obtención de la certificación. Estos costos son, quizás, los más difíciles de estimar.

¿Quién asume los costos de REDD+?

¿Quién asume los costos de REDD+? Esta es apenas una de las preguntas críticas abordadas en la herramienta [REDD+ benefits sharing knowledge tree](#) (árbol de conocimientos de la distribución de beneficios de REDD+), cuyo objetivo es ayudar a los responsables políticos a comprender el posible efecto de sus decisiones con respecto a cómo se distribuyen los beneficios obtenidos a partir de REDD+.

Luttrell y otros colegas de CIFOR han analizado las iniciativas subnacionales de REDD+ desde 2009, como parte del [Estudio Global Comparativo sobre REDD+](#). En varias oportunidades, los investigadores escucharon ciertas preocupaciones sobre los costos de REDD+ y quién se hará cargo de ellos.

“Las personas temen que los grupos menos favorecidos, como los pequeños productores o aquellos que no poseen tierras, no sean plenamente compensados por los costos de oportunidad que deben afrontar”, sostiene Erin Sills, catedrática de la Universidad de Carolina del Norte y autora principal de la próxima publicación.

“Otra preocupación es que REDD+ se convierta en un mandato sin fundamento para las instituciones de REDD+ del país, las cuales deberán hacerse cargo de importantes costos que no serán reconocidos ni compensados”.

“Queríamos saber si esos miedos estaban bien fundados”.

¿Quién enfrenta las consecuencias de los costos de implementación?

Para determinar quién ha estado asumiendo las consecuencias de los costos de implementación, los investigadores solicitaron a 22 [iniciativas subnacionales de REDD+](#) que enumeraran las instituciones que tenían control sobre al menos un 5 por ciento del presupuesto total de la iniciativa, o que hubieran dedicado al menos cinco días al mes a la implementación.

“Considerando todas las iniciativas, figuraban 139 instituciones en esa lista: 60 organizaciones de la sociedad civil, 43 instituciones gubernamentales y solo 19 empresas con fines comerciales”, afirma Sills, quien es además asociada sénior de CIFOR.

Los informantes clave de cada iniciativa luego clasificaron las instituciones en tres grupos:

1. Instituciones cuyos costos se encuentran totalmente cubiertos (o posiblemente recibiendo un excedente) por parte del presupuesto inicial de REDD+.
2. Instituciones cuyos costos se encuentran parcialmente cubiertos.
3. Instituciones con múltiples funciones que tienen una cobertura parcial y que reciben un excedente.

Al realizar un análisis más exhaustivo, descubrieron motivos suficientes de preocupación respecto de la reducción de los costos de implementación de REDD+ en las instituciones de los países en desarrollo; en especial, gobiernos locales y regionales.

En primer lugar, no existen instituciones gubernamentales involucradas en la implementación de las iniciativas de REDD+ que hayan vendido créditos de carbono. En segundo lugar, de las iniciativas de REDD+ que han fallado o concluido, más de un tercio contó con la participación de instituciones ejecutoras gubernamentales. En tercer lugar, menos de un cuarto de las instituciones gubernamentales implicadas en la implementación de REDD+ cubren completamente sus costos con financiamiento de REDD+.

“Esto parece contraponerse a la expectativa de que REDD+ generará beneficios que puedan distribuirse”, sostiene Sills.

“Estas cifras nos dicen que, en la actualidad, muy pocos actores afirman que se benefician económicamente de REDD+ o son vistos como beneficiarios”.

Por el contrario, en estos primeros esfuerzos por ejecutar REDD+, parece que el desafío ha sido cubrir los costos por completo, no decidir cómo repartir el excedente.

Esta es una conclusión que Rob Dodson conoce demasiado bien. Rob lidera las operaciones de campo africanas de [Wildlife Works](#), una compañía privada que ejecuta una cartera de proyectos de REDD+ en todo el mundo.

“El costo de inicio de estos proyectos es definitivamente un factor limitante”, afirma. “Intentamos mantenernos a flote con nuestros proyectos. Probablemente seamos uno de los proyectos mejor financiados. Pero realmente estamos luchando”.

¿Quién se ve más afectado por los costos de oportunidad?

Los investigadores analizaron los usos de la tierra sujetos a posibles restricciones impuestas por REDD+, así como los grupos interesados que se verían más afectados por estas restricciones.

“En las iniciativas que estudiamos, la agricultura y la ganadería son las actividades más importantes que se verán afectadas por la ejecución de REDD+, en términos del beneficio económico anticipado y de la cantidad de personas involucradas”, sostiene Luttrell.

Muchos cálculos de los costos de oportunidad han asumido que los habitantes locales tendrán un régimen seguro de tenencia de la tierra con derechos de propiedad claramente definidos y aplicados.

“Esto es una gran suposición”, dice Luttrell, “y puede significar que se malinterpreten los verdaderos costos de oportunidad de los habitantes locales que llevan a cabo actividades tradicionales no reconocidas formalmente por la ley”.

Para comprender mejor esto, clasificaron a los grupos interesados implicados en función de la legalidad o ilegalidad de sus actividades, teniendo en cuenta la tenencia de la tierra.

En este sentido, descubrieron que los usos de la tierra a partir de los cuales se beneficia una mayor cantidad de gente suelen ser ilegales o ambiguos en términos jurídicos: solo en seis sitios de REDD+ dichos usos fueron claramente legales.

“Tal vez lo que más sorprende, en más de la mitad de los sitios, es que los usos más rentables de la tierra estaban basados en la tenencia ilegal o ambigua desde el punto de vista jurídico”, sostiene Luttrell.

Esto plantea más preguntas sobre quién tiene derecho legítimo sobre los ingresos de REDD+: ¿deberían también los usuarios forestales ilegales tener derecho a los beneficios? Quedan esta y otras por resolver.

Fuente: Blog CIFOR: <http://blog.cifor.org/41608/quien-asume-realmente-los-costos-de-redd-la-respuesta-podria-sorprenderlo?fnl=es>

Racismo en los bosques: Un proceso de opresión al servicio del capital

Un modelo para el racismo ambiental

Por Bobby Peek*

WRM, 19 de mayo, 2016.- En 1969, cuando tenía tres años de edad, mis padres se vieron forzados a mudarse de la casa en la que nací, situada en un barrio de gente de varios colores, etnias e incluso clases, a una duna de arena despojada de toda vegetación y a la que dejaron vacía a excepción de algunas casas de bloque mal construidas, sin electricidad, revoque o cubierta, y cerradas con techo de asbesto.

Tuvimos que mudarnos porque mi familia fue clasificada en Sudáfrica como gente de color (negra), gente de ascendencia mixta. Debido a nuestras características físicas, el Estado - que era un Estado blanco, del apartheid - nos trató de manera diferente.

Las casas, ubicadas en una empinada ladera de arena suelta, carente de vegetación, estaban separadas tan solo por unas escasas láminas de metal de construcción. La vista que teníamos desde nuestra nueva casa era la refinería de petróleo US-Mobil, que como una maldición volcaba su humareda tóxica sobre la población local de color.

El resultado inmediato de esto no sólo fue una lesión a nuestra dignidad y bienestar psicológico sino también daños físicos a nuestro organismo. Al no tener electricidad debíamos hervir agua en un quemador que, siendo un niño pequeño, tiré al suelo derramándome encima agua hirviendo. La ropa quedó adherida a la piel y mi cuerpo se llenó de ampollas.

Con las pronunciadas pendientes del lugar y el metal como muro de contención, era casi seguro que ocurriría un desastre. Cuando llegaron las primeras lluvias, mi hermana se resbaló por la ladera y cayó sobre la lámina de metal, cortándose el cuerpo. Con los humos tóxicos llegó el asma, y yo formé parte del 52% de la población juvenil local - la cifra más alta registrada formalmente en el país - afectada por esta maldición.

A causa de los gases tóxicos de la refinería de petróleo Mobil y de la fábrica de papel local Mondi - una de las principales subsidiarias de Anglo American-, tuvimos retrasos en el crecimiento. Pero lo más alarmante como jóvenes, en ese entorno carente de vegetación autóctona, con gente hacinada en viviendas pobres y una industria sucia en el horizonte, es una realidad y visión de la vida deformada. No podíamos imaginar otro mundo y adquirimos un enfermizo sentimiento de orgullo de tener que vivir en esa realidad de brutalidad industrial y naturaleza destruida.

Tanto esta planificación del apartheid como el racismo ambiental no ocurrieron por casualidad. Fue algo que se construyó a medida que el capital corporativo se confabulaba con el Estado. Al igual que la esclavitud, la planificación del apartheid necesitó tanto de la avaricia empresarial como del Estado para favorecer y proteger a la riqueza. A más de 150 años de la esclavitud y dos décadas después de la desaparición del apartheid, la realidad es que estas leyes racistas dieron lugar a una acumulación inhumana e ilegal de riqueza que hoy sigue estando protegida por “derechos de propiedad” en varias constituciones del mundo, incluso en la propia Sudafricana. El Estado ha creado sistemas para proteger las ganancias mal habidas.

Fundamentalmente, la planificación del apartheid y el subsiguiente racismo ambiental se consideran a menudo en el contexto de la llegada al poder en 1948 del abiertamente racista Partido Nacional, y la aprobación de leyes que obligaban a la segregación de las personas. Pero esto no es del todo correcto. El racismo ambiental vinculado a la planificación urbana se remonta a la década de 1920, cuando el entonces gobierno británico creó la primera ciudad segregada en Durban.

El gobierno del apartheid perfeccionó e institucionalizó la planificación británica, que dio lugar a lo que a menudo es referido como “un modelo de gueto”. Los guetos - townships en inglés, cuya traducción literal sería municipios - eran los lugares a los que se confinó por ley a la población sudafricana negra, un lugar al que mi familia y yo nos vimos obligados a trasladarnos a vivir en 1969. Así que ¿cómo se ve este modelo en la práctica? Tiene casas precariamente construidas, desprovistas de vegetación autóctona, con caminos polvorientos, industria contaminante en el perímetro, basureros de residuos tóxicos y municipales en el vecindario y, como una buena medida, un alcantarillado funciona frente a tu puerta. Éste es el modelo de la planificación del apartheid.

Cuando hoy se habla de racismo ambiental, a menudo salta a la vista el movimiento de Estados Unidos por los derechos civiles. Esto se debe a que en las décadas de 1960 y 1970, el movimiento negro logró impugnar y documentar exitosamente estas violaciones a los derechos civiles cometidas por el racismo. Fue fácil entonces avanzar de los derechos civiles a los derechos ambientales y, en la década de 1980, en Estados Unidos comenzó a hablarse de racismo ambiental. A esto se suma la forma en que académicos como el profesor Bullard, en el influyente trabajo “Dumping in Dixie” [un vertedero en Dixie], pusieron de relieve cómo la clase social y el color de la piel fueron decisivos para los gobiernos blancos a la hora de decidir dónde colocarían los vertederos tóxicos.

Esta narrativa del racismo ambiental, por lo tanto, no fue muy difícil de hacer en la emergente Sudáfrica democrática de la década de 1990. Quienes ya reclamaban democracia e igualdad para todos a través de las luchas por un sistema justo de vivienda, educación y salud, pudieron fácilmente alinearse con aquellas que procuraban hacer retroceder al racismo ambiental.

Pero a pesar de estas victorias en los derechos civiles en los Estados Unidos, de la victoria democrática en Sudáfrica, y de los numerosos gobiernos alineados al pueblo progresistas que han surgido, sobre todo en lugares como América Latina, los impactos en curso de los “proyectos de desarrollo” dejan su secuela de daño en personas y tierras.

Actualmente, las contaminantes centrales eléctricas alimentadas con carbón en Sudáfrica son causantes de la mayoría de las muertes provocadas por la contaminación del aire entre las comunidades negras pobres de Sudáfrica, en lugar de brindar a las personas una energía útil y accesible. En una Sudáfrica democrática, más del 30% de los sudafricanos viven en la pobreza energética, es decir, no tienen suficiente energía para cocinar y calentar sus casas de manera segura.

Tal como advierte Amigos de la Tierra, Mozambique, grandes proyectos de infraestructura como la proyectada represa Mphanda Nkuwa destruirán la zona inferior del río Zambezi así como las formas de sustento de sus pueblos, y no a cambio de energía para la población local sino para las industrias destructivas en Sudáfrica que requieren un uso intensivo de energía. La colocación de líneas de transmisión en Mozambique para hacer llegar energía a los pobres resulta demasiado cara.

Las grandes plantaciones de monocultivos en KwaZulu Natal, una provincia de Sudáfrica, han magnificado los efectos de la sequía de dos años en Sudáfrica, afectando principalmente a quienes menos agua utilizan ya que sus cultivos anuales de subsistencia se secan y sus animales mueren. A diferencia de los productores de monocultivos comerciales, no hay un seguro que los salve. Pero fue también el gran aumento de monocultivos, predominantemente de eucaliptos, en la década de 1980, en la zona central de KwaZulu Natal, lo que dismanteló la industria lechera que daba un gran número de puestos de trabajo, y obligó a la población rural negra a trasladarse a zonas urbanas, provocando la intensificación de la violencia política entre la población urbana y la población rural inmigrante, resultando en miles de muertes.

En la actualidad, nuestros gobiernos mundiales se han rendido frente al poder de las empresas, que afianzarán aún más el racismo ambiental; y serán las comunidades negras e indígenas las que saldrán más perjudicadas. Luego de otra ronda de conversaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en diciembre de 2015, los mecanismos de mercado —como REDD— se han afianzado, anunciando un futuro sombrío para los pueblos indígenas en la medida que sus tierras les serán arrebatadas supuestamente para “salvar el planeta y los bosques”, mientras que les quitan sus medios de vida y las plantaciones les absorben sus aguas. Ni un solo gobierno se puso de pie en París durante las conversaciones de la ONU para decir: “esto dañará a nuestro pueblo, no podemos cumplirlo”. Así que el camino que facilita el racismo ambiental fue acordado a escala mundial, para ser aplicado a escala local.

Pero al igual que muchos de quienes fuimos reubicados en los sombríos días del apartheid, es necesario dar crédito a la gente mayor. Para ellos otro mundo fue posible, ya que lo vivieron, y muchos se aseguraron de que a través de la dolorosa experiencia del apartheid, nosotros, como niños, lo recordáramos. Escuchemos hoy a los pueblos indígenas del mundo y a quienes viven con la tierra y recordemos que otro mundo es posible.

*Bobby Peek, es activista ambiental, integrante de Amigos de la Tierra, Sudáfrica, su correo electrónico: bobby@groundwork.org.za

Fuente: WMR: <http://wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin-wrm/seccion1/un-modelo-para-el-racismo-ambiental/>

Las raíces coloniales racistas de la conservación occidental de los bosques

Servindi, 18 de mayo, 2016.- El “proyecto REDD corredor Kasigau”, ubicado en Kenia, África, “no sólo profundiza la injusticia en torno a la tierra sino que también favorece (...) a los dueños de las haciendas en lo que se refiere a la asignación de las ganancias”.

“Proyectos como el proyecto Kasigau no sólo profundizan las desigualdades locales y las prácticas racistas sino que también permiten que las industrias contaminantes que compran los créditos de carbono generados, hagan lo mismo en otros lados”.

Así lo advierte Ruth Nyambura, miembro del colectivo ecofeminista africano “African Ecofeminist Collective”, en un artículo donde analiza el proyecto que dirige Wildlife Works, una empresa privada con sede en Estados Unidos.

El proyecto Kasigau se ubica en el Condado Taita Taveta y estima que ayudará a evitar más de 48 millones de toneladas métricas de emisiones de carbono en un período de 30 años.

Para Nyambura el análisis del caso específico del proyecto resulta de interés porque muestra “las formas en que los mercados de carbono despolitizan y deshistorizan no sólo las experiencias de la comunidad local con respecto a las formas en que sus ecosistemas y medios de vida han sido destruidos, sino también las discusiones mundiales sobre el cambio climático.”

Actualmente, el proyecto que se inició en 2008 se encuentra en su tercera fase de ejecución en fincas con diversos sistemas de propiedad y de tenencia de la tierra: individual, empresas privadas y Empresas Agrícolas Dirigidas (DAC, por su sigla in inglés).

Sin embargo, “son las comunidades locales las que deben asumir los costos derivados de la inseguridad de la tierra y de las rígidas demandas del proyecto de carbono en cuanto al uso de la tierra”.

Las comunidades locales que no tenían ningún acuerdo jurídicamente vinculante con el proyecto que definiera claramente su participación en los ingresos “a menudo sólo recibieron una sexta parte de los ingresos recaudados. Esto a pesar de que a las comunidades no se les permite practicar agricultura de subsistencia ni utilizar los bosques como solían hacerlo”.

Tal como están las cosas, los mecanismos de mercado como REDD+ redefinen la “naturaleza” tomando un sendero particularmente ideológico que reforzaría aún más la “supremacía” de un concepto de conservación occidental que sólo ve a los bosques como árboles y luego, literalmente, como dinero.

En esa perspectiva, las comunidades locales son consideradas obstáculos para la “conservación de la naturaleza” y, por ende, para la obtención de lucro, apunta la autora.

Y es que las “cuestiones del carbono” no pueden separarse de las preocupaciones más amplias relativas a los derechos sobre los bosques y los derechos humanos.

“Ésta es la razón por la cual las comunidades y activistas de todo el mundo exigen que tanto los discursos sobre el cambio climático como las soluciones, deben considerar la política y las historias del mundo, y particularmente los discursos geopolíticos que han marcado la asociación de los países del Hemisferio Norte y del Hemisferio Sur” concluye Ruth Nyambura.

A continuación el artículo completo publicado por el Movimiento por los Bosques Tropicales:

Las raíces coloniales racistas de la conservación occidental de los bosques: una mirada a un proyecto REDD en Kenia

*Por Ruth Nyambura**

18 de mayo, 2016.- Sería equivocado históricamente no identificar firmemente que los conceptos occidentales de conservación de la naturaleza tienen sus raíces en la época colonial. La ecologista política y ecofeminista Vandana Shiva, deja muy clara esta relación en su libro “Abrazar la vida: Mujer, ecología y supervivencia”, cuando afirma que,

En la década de 1970, la movilización de las mujeres del movimiento Chipko de la región del Himalaya, que se alzaron en protesta para proteger sus bosques de la explotación comercial poniendo sus cuerpos y sus vidas en riesgo, dio continuidad a casi un siglo de resistencia en todo el país. La administración colonial británica aprobó las Leyes Forestales de 1878 y 1972, que erosionaron por completo los derechos de la población local a sus bosques a la vez que dieron acceso sin restricciones a los militares británicos y a sus empresas.

Estas mujeres no sólo rechazaban un orden político y económico impuesto para beneficio de los intereses del Imperio Británico, incluyendo a la élite local, sino que, en los hechos, cuestionaban las diversas manifestaciones del capitalismo hetero-patriarcal que ahora se expresaban en una redefinición y revalorización de la “naturaleza” a partir de una visión occidental patriarcal del mundo. Una visión que prioriza las ganancias frente al bienestar de las personas y los ecosistemas, así como a su trabajo productivo y reproductivo. Se trata de una visión ciega ante la interconexión de la “naturaleza” y profundamente impregnada de las políticas racistas de concebir a lo “nativo” y sus formas de conocimiento como “el otro”.

Uno de los lugares donde estas tensiones y diferencias ideológicas se manifiestan fuertemente es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) - el organismo mundial encargado de trabajar con los gobiernos del mundo para elaborar una forma de abordar la crisis climática. Lamentablemente, los grupos progresistas y las comunidades de vanguardia en lucha contra los impactos de la crisis coinciden en que las negociaciones han estado abiertas a grupos de presión empresariales y permitieron que los países occidentales - que han sido los que han tenido la mayor responsabilidad por la crisis - socavaran los principios de equidad y justicia y forzaran a los países del Sur a soportar la mayor parte de la carga de los esfuerzos de adaptación y mitigación a través de los mercados de carbono.

La importancia de los bosques y de los ecosistemas forestales para este planeta va mucho más allá de ser literalmente los pulmones de la tierra mediante la absorción de las emisiones de dióxido de carbono y la liberación de oxígeno. Millones de personas en todo el mundo, en especial los pueblos indígenas, dependen de los bosques como su medio de vida y para cubrir la totalidad o parte de su sustento. Los bosques recargan los acuíferos cuando el agua pasa entre sus raíces; protegen los ecosistemas aguas abajo al absorber la escorrentía superficial, y tienen un importante valor espiritual, cultural y lingüístico en todo el mundo, pero más aún en las cosmovisiones de los pueblos indígenas.

La Reducción de las Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD+) es un ejemplo de un mecanismo del mercado de carbono amparado por la CMNUCC. Le atribuye un valor monetario al carbono que es “absorbido” por los bosques, asumiendo que si se da dinero a las comunidades locales, a los Estados, a las ONG y a las empresas, eso será un “incentivo” suficiente para proteger los bosques - y el carbono que posean. Esto, entonces, plantea la crisis climática no como un problema histórico arraigado en el modelo de desarrollo capitalista basado en los combustibles fósiles, sino más bien como un problema de mercado que

debe ser resuelto por el mismo sistema económico, o los mismos sistemas económicos, que crearon el problema.

REDD en Kenia: reforzando desigualdades históricas

El “proyecto REDD corredor Kasigau”, ubicado en el Condado Taita Taveta de Kenia, resulta un caso interesante que muestra las formas en que los mercados de carbono despolitizan y deshistorizan no sólo las experiencias de la comunidad local con respecto a las formas en que sus ecosistemas y medios de vida han sido destruidos, sino también las discusiones mundiales sobre el cambio climático. El proyecto, ahora en su tercera fase de ejecución, se inició en 2008 en fincas con diversos sistemas de propiedad y de tenencia de la tierra: individual, empresas privadas y Empresas Agrícolas Dirigidas (DAC, por su sigla in inglés).

El proyecto está dirigido por Wildlife Works, una empresa privada con sede en Estados Unidos, que estima que el proyecto Kasigau ayudará a evitar más de 48 millones de toneladas métricas de emisiones de carbono durante un período de 30 años. Las reducciones de emisiones se efectuarían principalmente a través de prácticas de supervisión y manejo de cambios en el uso del suelo, que incluyen suspender la agricultura de tala y quema, la producción de carbón, así como la reducción de la deforestación y la degradación de los bosques. Se estima que el proyecto emplea 400 personas para el funcionamiento de sus actividades, incluida una fábrica de procesamiento de prendas de vestir para exportación.

Los créditos de carbono generados por el proyecto se venden en el mercado voluntario y los ingresos se dividen entre 3 partes (al menos en teoría): un tercio es para el ejecutor del proyecto -Wildlife Works-, otro tercio es para las comunidades locales de las zonas de asentamiento, mientras que el tercio restante es para los dueños de la finca. Una investigación publicada el año pasado pone de relieve los problemas que existen en la forma en que actualmente se reparten las ganancias. En realidad, los dueños de la tierra (propietarios de la finca) son los primeros que reciben el dinero, luego se deducen los costos del proyecto y lo que queda del dinero se distribuye entre las comunidades locales (1).

La investigación también revela que los dueños de las haciendas habían firmado acuerdos contractuales a 30 años, que les daban derecho a percibir una tercera parte de los ingresos generados antes de deducir los costos asociados a la ejecución del proyecto. Las comunidades locales, por otra parte, no tenían ningún acuerdo jurídicamente vinculante con el proyecto que definiera claramente su participación en los ingresos. Sólo tenían algo que podría ser descrito como un “acuerdo de caballeros”, y a menudo sólo recibieron una sexta parte de los ingresos recaudados. Esto a pesar de que a las comunidades no se les permite practicar agricultura de subsistencia ni utilizar los bosques como solían hacerlo.

Pero la distribución de los ingresos no es el único problema asociado con el proyecto. Hay serios problemas en torno a cómo el proyecto de carbono refuerza aún más las desigualdades históricas en torno a la tierra sufridas por las comunidades locales (sobre todo de Taita) desde que Kenia era una colonia británica. La tierra en la que se asienta el proyecto fue inicialmente tierra comunal, antes de que las políticas coloniales del siglo XX cambiaran drásticamente el sistema de tenencia de la tierra transformándolo en diversas formas de propiedad privada que los sucesivos gobiernos posteriores a la independencia de Kenia consolidaron aún más.

En las décadas de 1920 y 1930, el gobierno colonial facilitó la instalación de haciendas agrícolas comerciales a gran escala, las cuales plantaron principalmente sisal y café mediante el arrendamiento de tierras a granjeros blancos. Durante este período, miles de comunidades locales fueron desalojadas rápidamente de sus tierras y también se les restringió el acceso a las tierras comunales que utilizaban periódicamente para la caza, la recolección y el pastoreo. El

gobierno catalogó a estas tierras como “improductivas” (idle), un término que todavía se utiliza para describir las tierras utilizadas por las comunidades locales e indígenas en todo el mundo. Además de esto, se anexó más tierra de las comunidades locales para la creación de parques y reservas nacionales, lo cual incrementó aún más sus reclamos sobre el territorio y también deterioró el conocimiento y la relación que las comunidades mantenían con la naturaleza y la vida silvestre.

Luego de la independencia se crearon fincas en tierras en fideicomiso (tierras en manos de los consejos de gobierno locales, a nombre de las comunidades locales), pero en lugar de revertir las injusticias históricas sufridas por las comunidades durante mucho tiempo, una élite local - que consiste principalmente de políticos -se concedió a sí misma y a sus aliados arrendamientos de tierra en forma individual o como accionistas de las Empresas Agrícolas Dirigidas (DAC, por su sigla en inglés). Con el tiempo, la mayoría de las haciendas se endeudaron debido a la mala gestión y a la caída general de los mercados locales de café y sisal. Pero la dinámica de la propiedad de las haciendas todavía continúa, aun cuando numerosos miembros de la comunidad se han visto obligados a convertirse en ocupantes ilegales de esas haciendas y de otras tierras que están en manos de particulares.

¿Qué ocurre cuando las comunidades ya marginadas por los sistemas de tenencia de la tierra - que privilegian la propiedad privada individual - quedan sujetas a proyectos que aseguran que el poder y la riqueza basada en la tierra permanezca en manos de unos pocos? ¿Y qué sucede cuando estos proyectos restringen las formas de vida y sustento de las comunidades al “encerrar” los bosques para destinarlos a proyectos de carbono? El proyecto Kasigau no sólo profundiza la injusticia en torno a la tierra sino que también favorece explícitamente a los dueños de las haciendas en lo que se refiere a la asignación de las ganancias. Sin embargo, son las comunidades locales las que deben asumir los costos derivados de la inseguridad de la tierra y de las rígidas demandas del proyecto de carbono en cuanto al uso de la tierra.

Las “cuestiones del carbono” no pueden separarse de las preocupaciones más amplias relativas a los derechos sobre los bosques y los derechos humanos. Ésta es la razón por la cual las comunidades y activistas de todo el mundo exigen que tanto los discursos sobre el cambio climático como las soluciones, deben considerar la política y las historias del mundo, y particularmente los discursos geopolíticos que han marcado la asociación de los países del Hemisferio Norte y del Hemisferio Sur.

Tal como están las cosas, mecanismos de mercado como REDD+ redefinen la “naturaleza” tomando un sendero particularmente ideológico que reforzaría aún más la “supremacía” de un concepto de conservación occidental que sólo ve a los bosques como árboles y luego, literalmente, como dinero. Mientras tanto, las comunidades locales son consideradas obstáculos para la “conservación de la naturaleza” y, por ende, para la obtención de lucro. En última instancia, REDD+ no se ocupa de las causas fundamentales de la destrucción de los bosques. Proyectos como el proyecto Kasigau no sólo profundizan las desigualdades locales y las prácticas racistas sino que también permiten que las industrias contaminantes que compran los créditos de carbono generados, hagan lo mismo en otros lados.

La escala y la velocidad de las crisis ecológica, alimentaria, energética y climática no sólo no tienen precedente sino que sus impactos se concentran en gran medida en el Hemisferio Sur y en los espacios y territorios del Hemisferio Norte donde residen las personas de color, incluidas las naciones tribales y las primeras naciones. En todo el mundo ha sido muy evidente que los impactos de la crisis ecológica tienen claros marcadores raciales y de clase. El “encierro” de la tierra y los territorios comunales para establecer proyectos REDD+ refuerza las ideas contrarias a lo comunitario, la lucha de clases de los pobres, las ideologías racistas que

discriminan a los indígenas y a las mujeres, y las ideologías racistas y discriminatorias en torno al acceso a la tierra. ¡Debemos reforzar la idea de que nuestros bosques no están en venta!

Nota:

(1) <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837715002926>

*Ruth Nyambura, es miembro del colectivo ecofeminista africano "African Ecofeminist Collective", su correo electrónico: africanecofeminist@gmail.com

Fuente: WRM: <http://wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin-wrm/seccion1/las-raices-coloniales-racistas-de-la-conservacion-occidental-de-los-bosques-una-mirada-a-un-proyecto-redd-en-kenia/>